

EL PERÚ Y LAS FALACIAS DEL “NEOPOPULISMO”

ALDO OLANO ALORI*

INTRODUCCIÓN

La necesidad de explicar las tendencias políticas manifestadas por los diversos países de la Región Andina, no podía dejar de lado el estudio de las formas en que actualmente se manifiestan las prácticas populistas en el manejo del gobierno, en un contexto en el cual tiende a incrementarse la ingobernabilidad. Es demasiado evidente que los discursos y las prácticas políticas cotidianas están impregnados de una especie de imaginario en donde gobernantes y gobernados, siempre abrumados por la recurrente situación de crisis política, sacan a relucir sus simpatías por un tipo de gobierno que les asegure su futuro. Pero las cosas tienden a empeorar cuando lo estatal es visualizado por la mayor parte de la ciudadanía como un conjunto de instituciones ineficientes, causa de la corrupción y su misma existencia perjudica el desenvolvimiento de la sociedad. Peor aun cuando los discursos de cada gobier-

no, sea éste democrático o autoritario, se nos muestran como fundacionales y nos hablan del inicio de una “nueva época”, pero sólo logran agravar el desencanto con el sistema político. Entonces, el Estado sólo contará con los mecanismos de excepción que la constitución reconoce con el ánimo de encarar los problemas, los mismos que no son obra de una contingencia o circunstancia excepcional, sino más bien tienen un sustrato histórico y cultural que trasciende la simple coyuntura.

El Perú contemporáneo hay que entenderlo como producto de circunstancias en donde confluyen la historia y la política, la economía y la sociedad. En tal sentido, y con las precauciones del caso, pensamos que la ingobernabilidad es producto de la formación de un tipo de cultura política anti-institucional no necesariamente anti-estatal. Esto es consecuencia de haberse mantenido unos órdenes sociales y políticos excluyentes a pesar de la modernización de corte liberal o proteccionista planteadas

* Sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú, maestro en ciencia política con mención en política comparada de los países andinos, FLACSO – Ecuador. Docente e investigador en el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Artículo entregado el 23 de octubre del 2005. Artículo aprobado el 30 de noviembre de 2005.

durante el pasado siglo. Ahora bien, si la ciencia política hace rato estableció que los cambios sociales debían llevar a que las instituciones también cambien para así mantener estable el sistema, entonces el Perú actual sería la expresión paradigmática de un desencuentro entre lo ideológico-social y lo político-institucional. Planteamos, entonces, que el estado de ingobernabilidad y preeminencia de prácticas populistas en la política nacional, es producto de la confluencia de tres proyectos auto referidos a sí mismos como inconclusos: el reformismo tardío del gobierno militar (1968-1975), el demócrata liberal (1980-1990, 2000-2006) y el autoritarismo patrimonialista (1992-2000).

Tal como veremos más adelante, toda reorganización política, ya sea a través de normas e instituciones reconocidas como de interés público en la constitución de la república, o puestas al servicio de un régimen personalista, también por el mismo medio, casi siempre ha incrementado la ingobernabilidad. Esto lo podemos observar, por ejemplo, con la transición iniciada en 1978 durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez, proceso que supuso la elaboración de una nueva constitución, la convocatoria a elecciones generales y el traspaso en julio de 1980 del control del Estado a los civiles, utilizando mínimas normas democráticas. En medio del torbellino social desatado por la puesta en marcha de un plan de ajuste económico desde 1974, se elaboró la constitución con la participación de partidos y coaliciones

políticas tanto de derecha como de izquierda, cuyo contenido ignoró muchos de los cambios realizados durante la llamada “primera fase” o “fase reformista” del gobierno militar, sin tomar en cuenta que la sociedad había sido activada por el discurso y las políticas sociales de estos mismos militares. Eso quizá explica por qué el gobierno de Fernando Belaúnde, iniciado en 1980, sufrió de tanta inestabilidad, pues tuvo que afrontar la oposición desde diversos frentes, por ejemplo, el social movilizado por reivindicaciones postergadas durante la dictadura en su segunda fase (1975-1980), o el partidario actuante en escenarios tan diversos como el Congreso o los gobiernos locales y regionales.

De la misma manera lo podremos observar en la pertinaz actitud de Alberto Fujimori por mantenerse en el gobierno, transgrediendo la normatividad elaborada por sus partidarios en el Congreso. La voluntad de perpetuarse en el poder y ser el único representante del patrimonialismo autoritario, lógico proceder en la racionalidad del dictador, generó un clima de incertidumbre que sólo pudo culminar con su destitución en noviembre del año 2000. Pero claro y como la historia tiende a repetirse, el actual gobierno confronta una situación parecida a la de mediados de 1980, producto de la oposición en las instituciones de la política considerada formal, pero también la que utiliza la movilización en aras de resolver los problemas originados en las últimas décadas.

Ahora bien, la recurrente ingober-

nabilidad en el Perú la podemos entender si hacemos un estudio transversal que involucre distintas causas. Lo primero por señalar es que todas aquellas expresiones sociales incubadas en la primera mitad de la década del setenta, las mismas que demandaron un lugar en el sistema político durante la violenta década de los ochenta, resistieron la ofensiva estatal en los noventa y se visibilizan al comenzar el nuevo siglo, desconocen la institucionalidad vigente a la vez que demandan mayor participación en su acceso al Estado. De la misma manera, expresiones de carácter populista reaparecen y la crisis política se incrementa producto del descontento ciudadano, muchas veces alimentado por los discursos radicalizados de determinados actores sociales y políticos, los cuales no han logrado una representación política propia a pesar de su activa participación en los cambios habidos en el país. Esto lo podríamos quizá entender como ausencia en términos de lo que significa una dirección y organización centralizadora, en momentos que el pluralismo económico y la diversidad social y cultural tienden a crear múltiples canales de comunicación. En cualquier caso, las instituciones políticas de todo tipo, sean públicas o privadas, sufren las consecuencias originadas en la atomización de los representados. Aquí nos hacemos la siguiente pregunta ¿podemos seguir pensando esta situación, como crisis de los partidos y de la representación política?

Las respuestas no deberían ser tan obvias como se ha dicho docenas de veces en

distintos medios académicos. El bloqueo histórico del que habla Zimmelman, sólo podría irse resquebrajando si comenzamos a estudiar las formas en que lo nuevo, expresado en lo social de carácter popular igualmente capitalista, busca la forma de ser político y pretende alcanzar la solución de sus demandas o defender los derechos con los que aún cuentan, a través de medidas de hecho, lo cual obviamente incrementa las dificultades para gobernar el Perú. Pero ¿es posible una democracia gobernable en un lugar donde ha predominado lo contrario? Dictaduras militares o civiles a lo largo de nuestra historia republicana superan largamente a los gobiernos elegidos de manera legal y legítima, pero los mismos que nacen articulados con las esperanzas ciudadanas de cambio y regeneración, rápidamente sucumben a esa lógica de funcionamiento y manejo patrimonialista casi inmanente del Estado en el Perú. En tal sentido, quisiéramos dejar establecido que la ingobernabilidad no debemos considerarla como fenómeno extraño a nuestra historia política, y que más bien aquella tiende a acentuarse en los momentos que se pretende construir un régimen democrático de carácter liberal. Pensamos en la actual política como el trasfondo histórico sobre el cual pretende actuar hoy en día una normatividad confusa y distante de las expectativas de la ciudadanía, aquella que es más producto de la ideologizada actitud de una clase política altamente fragmentada y con una actitud manifiestamente individualista en

la administración de lo público.

En tal sentido, luego de la salida de la última dictadura militar y su remplazo por un régimen de origen electoral, nos encontramos en un punto en donde es posible llegar a pensar en que todo gobierno es potencialmente inestable. Una pregunta quizá muy ingenua sería ¿por qué? Consideramos que lo acontecido en las últimas tres décadas en el Perú es demostrativo de como importantes cambios en distintas esferas, permiten la aparición de nuevos actores sociales y políticos quienes al ser desconocidos como interlocutores sólo alimentan la permanente crisis política. La tesis que habla sobre las limitaciones democráticas del “movimentismo”, señala que la existencia de organizaciones sin reconocimiento estatal no posibilita el fortalecimiento de la sociedad civil, entonces el gobierno no puede establecer límites o canalizar las demandas ciudadanas. La consecuencia más visible se observará en lo que la ciencia política ha definido como ingobernabilidad¹.

Entonces, si la democracia liberal no es algo que forme parte de nuestra tradición política, menos aún que haya sido internalizada por los ciudadanos y administradores de lo público ¿debería estar incorporada en la agenda política de los complejos y muchas veces inidentificables actores sociales?, ¿por qué sorprenderse de la reiterada crisis política que afecta al país?, ¿será que estamos destinados a

convivir con la ingobernabilidad y los remanentes de prácticas populistas? Con este ensayo pretendemos dar cuenta de estas preguntas utilizando un análisis que consideramos interdisciplinario, de un período que tiene a 1985 como punto de partida. El período en mención abarca cuatro gobiernos, Alan García, Alberto Fujimori, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, tres tipos de régimen político, autoritario, de transición y democrático, además de dos políticas económicas, proteccionista y neoliberal. De la misma manera, confluyen la violencia política y la pacificación, la neutralización de los movimientos sociales con su espontánea reactivación, la casi desaparición de los partidos políticos y el surgimiento de múltiples organizaciones políticas que han pretendido adquirir la representación de los cambiantes sectores de la sociedad.

Éstos son los años en que se produce la última versión de populismo latinoamericano clásico, inclusive más tardío que el de los militares en su primera fase, como fue el gobierno de Alan García entre 1985 y 1990, pero también el momento en que se inicia un proceso de reforma económica neoliberal. En este trabajo enfatizaremos en la década que el Perú tuvo un gobierno originado en un proceso electoral abierto y competitivo, pero en donde el propio presidente dio un golpe de Estado. Desde ese entonces (abril de 1992), Alberto Fujimori y sus colaboradores más cercanos

¹ Alberty, 2003.

organizaron una institucionalidad al servicio del autoritario proyecto presidencial, momento en que el Estado se constituyó en un patrimonio de los más relevantes servidores públicos. Junto a esto, el gobierno había puesto en marcha un programa de liberalización económica basado en el “Consenso de Washington”, como medio para “reformular” la economía por medio del ajuste estructural.

Muchas preguntas pueden formularse alrededor del surgimiento del fujimorismo y podríamos empezar preguntándonos: ¿qué condiciones posibilitaron su triunfo en las elecciones presidenciales de 1990? Además, en los años que América Latina salía de la crisis económica y había una apuesta por sostener los regímenes democráticos a como diera lugar ¿cómo pudo sostenerse durante una década un gobierno que difícilmente podía ser considerado como democrático?, ¿cuál fue el rol de la llamada comunidad internacional ante el autoritarismo del gobierno? Por último, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas ante el derrumbe de su institucionalidad?, ¿dónde estuvieron los partidos políticos y los movimientos sociales en medio del desajuste institucional ocasionado por Fujimori? De todo lo anterior quizá podamos inferir la siguiente pregunta ¿por qué el gobierno de Alejandro Toledo fue tan frágil desde su primer día? Las respuestas a estos interrogantes pueden muy variadas, porque la ingobernabilidad y las prácticas populistas son realidades tangibles en el Perú y otros países de la Región Andina.

En tal sentido, en este ensayo, analizamos los momentos iniciales del gobierno de Alberto Fujimori y cómo se gesta el autoritarismo en medio del ajuste estructural y la puesta en marcha de políticas sociales dirigidas a generar la base que el naciente régimen necesitaba. Repasamos los fundamentos teóricos del programa de ajuste estructural en el Perú, señalando las difíciles condiciones económicas previas como pretexto para examinar la gestión económica durante el gobierno de Alan García. Como veremos en esta parte, se cambian el modelo económico y el régimen de acumulación, pero se profundizan cierto tipo de prácticas, las mismas que genéricamente denominamos populistas. Un segundo momento en el trabajo es la revisión de los afanes presidenciales por construir una institucionalidad autoritaria, constatando como el mismo gobierno se encargará de romper la normatividad contenida en la nueva constitución promulgada en 1993. El período que se inicia con la primera reelección en 1995 nos mostrará el interés gubernamental por cambiar el ordenamiento legal, utilizando el poder legislativo y el judicial, a través del copamiento e instrumentalización de las instituciones comprometidas en el proceso, o como se hizo al final del régimen mediante el expeditivo mecanismo del fraude.

A continuación explicamos por qué Fujimori fue derrotado en la primera vuelta electoral realizada el 9 de abril del 2000 por Alejandro Toledo. La presión internacional y la movilización ciudadana

son los factores que permiten entender por qué el gobierno se vio obligado a convocar a la segunda vuelta. Sin tener competidor, pues Toledo decidió retirar su candidatura, Fujimori ganó y esto quizá nos ayude a entender por qué a mediados de septiembre del 2000, la situación del gobierno se volvió insostenible. Los momentos iniciales del tercer mandato y su destitución marcan el punto final de esta parte. La elección de Valentín Paniagua como presidente provisional, su forma de afrontar los principales desafíos procedentes del fenecido orden autoritario, y continuamos con la campaña presidencial que se inició en enero del 2001, destacando el éxito del Partido Aprista Peruano y del expresidente Alan García. Terminamos con un análisis de la segunda vuelta electoral entre Toledo - García y una sección en donde presentamos los principales desafíos que mantiene el saliente gobierno y el régimen democrático en su conjunto.

1. ALGUNAS ACLARACIONES CONCEPTUALES

Antes de revisar el período histórico señalado en la introducción, quisiéramos dejar establecido algunas diferencias con los conceptos y definiciones comúnmente utilizados para señalar a un gobierno como populista, los cuales llevan a conclusiones casi siempre descalificadoras de alguna propuesta de cambio que se formule en las

políticas para la región. En primer lugar, el concepto de “neopopulismo” y sus diversas definiciones coincidentes en el carácter reduccionista de ellas, por ejemplo, la mediática o fiscalista. Compartimos la mayor parte de los criterios utilizados por Carlos Vilas para descalificar dicho concepto por su falta de integralidad, pues recientemente y sobre la base de utilizar algunos de los componentes que dieron forma al populismo clásico u otros que en su momento no se tuvieron, se pretenden caracterizar distintos gobiernos de la región como “neopopulistas”. Pero, además, y con la referencia permanente a estos gobiernos como potenciales amenazas, sea desde las disciplinas encargadas del análisis político o económico o desde los centros de poder, se manifiesta la voluntad de no proponer cambios en las políticas gubernamentales vigentes desde hace ya dos décadas².

En primer lugar, el reduccionismo mediático. Se ha vuelto sentido común el considerar que la permanente exposición en los medios vuelve a un gobernante “neopopulista”. Se argumenta que con esta forma de hacer política se amplían las posibilidades de dirigirse a un grupo numeroso de personas con las cuales se relaciona, básicamente, a través de su figura como líder benefactor y generoso, pero no se tiene en cuenta que hoy en día, el político o gobernante mediático pretende a resolver problemas de individuos: al desempleado, pero también a la madre

² Vilas, 2003.

abandonada, en medio de una política económica muy severa para las clases populares y las antiguas capas medias, que como sabemos son ahora predominantemente urbanas. Recordemos que ambos fueron importantes soportes en lo social y en lo ideológico del proyecto populista, las clases populares movilizadas a partir del discurso democratizador, nacionalista y antioligárquico, las capas medias con el aporte de intelectuales y profesionales en la organización del proyecto. Ahora bien, es claro que con la política mediática como estrategia se eliminan las intermediaciones institucionales al plantear una salida inmediata al problema presentado, pero por otro lado, se aprovecha de las mismas instituciones, civiles o militares por igual, para canalizar las adhesiones ciudadanas.

Con el accionar mediático, algo importante se pierde del populismo y es la posibilidad de que el ciudadano se identifique con el líder y la organización asistiendo a la plaza pública. Con la llegada de la política de masas, aquélla fue un lugar que logró constituirse en el espacio donde se definió una identidad política destinada a perdurar en el tiempo, lo cual conlleva una diferencia fundamental con el “neopopulismo”. Con lo mediático de éste se establece una relación muy coyuntural e inmediatista entre el líder y los seguidores, la cual se reactiva o relativiza al momento de encender o apagar el televisor, la radio o llamando por teléfono en un afán de simplemente comunicar, pero en un formato muy unidireccional, por lo

tanto, observamos un fortalecimiento del presidencialismo con todas las limitaciones que esto tiene para el fortalecimiento de la democracia como régimen político.

Al lado de esto se constata la nula voluntad por organizar a sectores de la sociedad y más bien se plantea una sociedad despolitizada, con el recurrente mensaje de no querer ser parte de la política “tradicional”. En ese sentido, la plaza significaba aportar en la fundación de un partido político, tan necesario para ser el soporte organizado de una sociedad movilizadora, ya sea por el inflamado discurso y la capacidad oratoria del líder populista o por alcanzar reivindicaciones postergadas durante la hegemonía de los gobiernos exclusionarios. El escenario público que se escoge contribuía a la movilización durante el populismo, la política mediática del “neopopulismo” conlleva la desintegración organizativa de los ciudadanos, pues es propulsora de las salidas individuales en medio de drásticas políticas de ajuste económico. Por último, hay que señalar que el partido populista será una organización política dirigida por el líder a lo largo de su vida, pero tuvo la suficiente capacidad para sobrellevar su desaparición, tal como lo demuestra el Justicialismo en Argentina o el APRA en el Perú. El partido para el “neopopulista” es innecesario salvo cuando se acercan elecciones y ante lo urgente del asunto, montan organizaciones en el sentido empresarial de la palabra.

Salvo la experiencia de Hugo Chávez en Venezuela, por parte de los llamados

“neopopulistas”, se observa poca disposición a organizar la sociedad y, peor aún, los escasamente organizados se consideran parte fundamental del problema, pues serán considerados como beneficiarios de múltiples privilegios, lo que en otros lugares y aquí mismo en América Latina fueron o son derechos sociales y políticos. En el “neopopulismo”, los ciudadanos se desmovilizan, pues no son convocados y si se movilizan sus demandas son descalificadas al ser consideradas como una amenaza a la “governabilidad”, el medio suplanta la plaza y las encuestas se encargan de medir el apoyo ciudadano. En términos organizativos sucede algo parecido, pues no son integrantes de partidos, se definen como antipolíticos y militantes por excelencia del antipartido, en tal sentido y como veremos en el siguiente acápite, Fujimori se mostraría como el caso paradigmático de esta afirmación.

En segundo lugar, el reduccionismo fiscalista y la economía política del “neopopulismo”. Ha sido lo suficientemente discutido el hecho de que la política económica del populismo se basó en el proteccionismo de determinados sectores y ramas de la economía, entre las que se destacó el sector industrial. Este modelo se vio reforzado en términos ideológicos con el modelo estructuralista de la CEPAL y el proyecto sustitutivo de importaciones aceptado por la mayor parte de los países de la región durante tres décadas. Junto a esto, se tuvo un proyecto de carácter redistributivo dirigido a aquellos sectores

de la sociedad integrados al proyecto como parte del proletariado fabril o clases medias emergentes, pero también a las clases populares con obras de infraestructura en las principales ciudades. No vamos a debatir las consecuencias de esta política económica, la misma que al final de cuentas incorporaba principios de doctrinas tan disímiles como el liberalismo, el keynesianismo o el socialismo, pues la discusión de hecho está cargada de diferencias tan marcadas que harían inviable alcanzar puntos de encuentro. Quisiéramos sí dejar establecido que el proyecto económico de los gobiernos considerados “neopopulistas”, poco o nada tiene que ver con lo resumido líneas arriba.

Esto último lo afirmamos en razón de que es suficiente mencionar una alternativa distinta a lo establecido en el modelo neoliberal, es decir, lo sostenido en el llamado “Consenso de Washington”, para inmediatamente ser descalificado como “populista”. Cualquier intento por incrementar el gasto público en inversión social no se acepta, pues generaría desequilibrios internos, con las consecuencias que muchos conocemos: déficit fiscal, inflación, reducción de las reservas, balanza comercial negativa. Recordemos que los principios doctrinarios, en el campo económico, de los “neopopulistas” le apuestan a que el modelo en marcha es lo suficientemente racional para asignar recursos a quienes se hayan hecho merecedores de ello, el Estado no debe interferir, pues su intervención ya sea dirigida a regular o redistribuir

pondría “nerviosos” a los mercados y generaría desconfianza en los más importantes agentes económicos, tanto locales como transnacionales. Los organismos multilaterales consideran que no hay espacio para medidas de política económica distintas a las que ellos promueven, y la academia se preocupa por la viabilidad del régimen encontrando amenazante un discurso o una política dirigida a incorporar aquellos sectores sociales más perjudicados por las “reformas” en marcha.

En tal sentido, es muy difícil para nosotros aceptar que se haya producido la existencia de algo llamado “neopopulismo” en la región, lo cual se comprueba con los gobiernos de Alberto Fujimori en el Perú, Carlos Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil durante la década pasada. Con lo sucedido recientemente y el promocionado “giro a la izquierda” observado en América Latina, a lo mejor estamos asistiendo a la emergencia de escenarios políticos y liderazgos que desde lo local y regional, cuestionan el actual proceso de organización mundial hegemonizado por el neoliberalismo como ideología y los centros de poder mundial en el plano político, y eso no da motivos para descalificarlos como amenaza ni para la democracia ni para la gobernabilidad.

2. CRISIS DEL LIBERALISMO DEMOCRÁTICO

Alberto Fujimori inició su mandato el 28 de julio de 1990 luego de haber derro-

tado al célebre escritor Mario Vargas Llosa. El rápido ascenso de Fujimori le originó múltiples problemas para conformar un gobierno, pues no contaba con una base partidaria organizada y menos con algo parecido a un plan de gobierno. Por tales motivos y a pesar que su discurso electoral no mostraba búsqueda de acuerdos, tuvo que recurrir a distintas organizaciones políticas y personalidades autodefinidas como independientes para que integraran su primer gabinete ministerial. Además, desde el inicio de su gobierno, pasaron a ocupar posiciones relevantes en la conducción del Estado altos oficiales de las FF.AA.

Resulta interesante constatar lo paradójico que resultó la conformación de este gobierno, pues fue el candidato “antipartido”, Fujimori, el que convocó a distintas organizaciones políticas para integrarlos a su gestión. El contraste con el gobierno de Belaúnde, una vez restablecido el régimen democrático en julio de 1980, resulta bastante ilustrativo. En esa oportunidad se formó una coalición gubernamental de centro derecha bastante frágil debido, entre otras cosas, a la ausencia de los partidos que constituían casi la mitad del electorado. Esta fue quizá la última oportunidad en que los remanentes aristocráticos y criollos de mediados de siglo pudieron imponerse en una elección nacional, y es aquí donde se manifiesta el primer desencuentro del período: el gobierno de la “gente decente” y respetuoso de la institucionalidad democrática, en medio de lo que José Matos Mar visualizaba como

el “desborde popular”³. Es también el momento en que la crisis política se gesta cuando organizaciones políticas y sociales de distinto tipo, las mismas que eran activadas tanto por discursos revolucionarios y líderes de los diversos matices que componían la izquierda marxista, como también por los que se sentían herederos del reformismo nacionalista del gobierno militar, fueron excluidas o renunciaron a participar en el pacto.

Ahora bien, tanto Fernando Belaúnde como su sucesor Alan García fueron candidatos de sus partidos, Acción Popular y el APRA respectivamente. Si bien es cierto el primero contó con el apoyo del minoritario Partido Popular Cristiano (PPC), apoyo que por lo demás no duró todo el período, estos dos gobiernos fueron de partido. En consecuencia, teníamos un sistema político donde la noción de “independiente” era inexistente y más bien el accionar político se organizaba en torno al esquema gobierno/oposición. Esto condujo a una situación bastante paradójica, pues antes de la posesión presidencial ya se había constituido un sector opositor. Esto hicieron el Partido Aprista Peruano (PAP) y la Izquierda Unida (IU) durante el gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985). El PAP se constituyó en la “oposición democrática”, pero no impidió que jóvenes militantes y dirigentes de provincias, muchos de ellos radicales en su percepción de la práctica política, activa-

ran incluso formas de oposición “desleal” en las escasas organizaciones que el partido controlaba o desde los gobiernos locales como alcaldes distritales y provinciales.

Por su lado, la recién formada IU, y tomando una decisión consecuente con los planteamientos ideológicos de algunos de sus integrantes, se proclamó la “oposición revolucionaria”, llegando algunos de estos mismos sectores a considerar que su presencia en el Congreso era secundaria, pues la verdadera democracia se gestaba con la lucha cotidiana en las calles. A pesar que su principal dirigente, alcalde de Lima y candidato presidencial Alfonso Barrantes señalaba la necesidad de integrarse plenamente al sistema político, la desunión programática caracterizaba al conglomerado izquierdista. El ideologizado discurso de los marxistas radicales establecía la necesidad de utilizar una estrategia que combinaba todas las formas de lucha, lo cual llevó a que se podía difundir el credo revolucionario desde los lugares de la democracia, como también participar activamente en la organización de la “insurgencia popular”. Izquierda Unida mantuvo durante la mayor parte de la década del ochenta lo que Sinesio López definió como una “ambigüedad excesiva”, al mismo tiempo que la violencia y la crisis política se incrementaban. En este mismo período incluimos la oposición de las dirigencias sindicales, las mismas que iban perdiendo representatividad conforme

³ Matos Mar, José, 1984.

cambiaba la organización de la economía y la sociedad se transformaba.

Oposición democrática igualmente fueron Acción Popular y el Partido Popular Cristiano durante el gobierno de Alan García, entre 1985 y 1990. Sin los tintes abiertamente radicales o ambiguos de la izquierda marxista, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano jugaron el rol de la oposición leal. Sin embargo, las condiciones para este período habían cambiado, puesto que al tradicional esquema oposición radicalizada/gobierno excluyente se habían añadido factores aún más desestabilizadores como las organizaciones armadas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Esto le sucedió al APRA cuando fue gobierno en relación con su base social y el manejo de la oposición tanto de derecha como de izquierda. Cuando se desató la grave crisis económica a mediados de 1988, el APRA no sólo no pudo satisfacer a las clases sociales que había reivindicado desde su fundación en 1924, menos las demandas de las nuevas clases populares urbanas o sectores medios surgidos de las transformaciones acontecidas en la segunda mitad del siglo XX.

Las cosas tenderían a complicarse aún más cuando el partido aprista se vio obligado a poner en marcha una política de ajuste económico en contra de la voluntad presidencial, política por lo demás incompleta y, en consecuencia, un factor agravante de la crisis económica a partir de 1988. Ahora bien, el ser oposición durante

el gobierno anterior le facilitó al joven y carismático líder lograr una alta votación al momento de ser elegido, pero ni el discurso ni la organización de su partido le permitieron mantener el apoyo logrado en las urnas. Podemos afirmar, entonces, que gran parte de la crisis política de esa década se explica por la nueva complejidad social y política reflejada en la movilización de la ciudadanía liderada por algunos actores con representación en la política nacional, ante la imposibilidad de las instituciones para canalizar las demandas de la sociedad, al tiempo que entraban en escena las organizaciones insurgentes

Entonces, en medio de la reorganización social, la ilegitimidad de las instituciones surgidas de la nueva constitución y la ineficacia de los gobiernos que la legalidad vigente definía como democráticos, podemos hacernos una pregunta: ¿qué sectores de la sociedad respaldaron en términos electorales al candidato recién llegado? Podemos señalar que el sustento social y electoral de Fujimori se debe a la erosión de la institucionalidad de corte demo-liberal antecedida por las transformaciones sociales que llevaron a la existencia de un gran electorado urbano y rural, no incluido en las organizaciones políticas. Como producto de una permanente crisis económica y un proceso de socialización política en medio de la violencia y desintegración del sistema político, estos sectores de la sociedad se distinguían por haber construido una identidad política con base en múltiples

y cambiantes referentes, distintos de los que tuvieron los movimientos sociales y partidos políticos, sobre todo de izquierda, durante los años setenta y primera mitad de los ochenta⁴. La informalidad y el subempleo, los mismos que originan un alto grado de precariedad económica entre la población, aunado al descontento de los nuevos y jóvenes electores, corroyeron los fundamentos con que se construyeron las identidades que acompañaron las formas de hacer política durante las tres décadas anteriores. Ante el fracaso de los gobiernos de partido en la administración del Estado, la búsqueda de una representación política no atada a lo “tradicional” fue el objetivo del electorado en el apoyo dado a Fujimori.

Ahora bien, distintos elementos confluían para sembrar más incertidumbre en medio de la grave crisis que el país vivía cuando asumió el nuevo gobierno. Desde sus inicios, éste dejó en claro la equivocada percepción de que se pretendía ponerle trabas a su gestión. Aunque no era responsabilidad de los partidos con representación parlamentaria, la conformación del legislativo era una de ellas pues se percibió como una institución con la que Fujimori no contaba para su accionar político. El hecho de haber obtenido en la primera vuelta electoral el 24,6% de los

votos; momento en que también se elegía a los congresistas según la constitución de 1979, le impidió obtener mayoría parlamentaria como sí la tuvieron los gobiernos de Belaúnde y García, así Fujimori cuando inició su primer período contaba con 32 diputados de un total de 180 y 14 senadores de 60. Resulta obvio que el alto grado de dispersión en la representación parlamentaria lo obligó a buscar acuerdos para encauzar su administración en el corto plazo, cosa que le redituó buenos resultados al obtener el apoyo a su política económica por parte de los antiguos integrantes del Frente Democrático (FREDEMO)⁵, a la vez que el APRA cerraba filas con CAMBIO 90 para exonerar a Alan García de su responsabilidad en el asesinato de casi 300 militantes de Sendero Luminoso en los penales limeños en junio de 1986.

De la misma manera, contribuyendo a los temores del Presidente se encontraba su propio partido político, Cambio 90. En los momentos que hacían su ingreso por la puerta grande de la política los llamados “movimientos independientes”, el accionar de Cambio 90 se fundaba en la escasa lealtad de sus militantes a la organización. En tal sentido, más que un partido político debe ser definido como una “empresa electoral” al servicio de sus fundadores y principales integrantes, en

⁴ La identidad en la izquierda peruana ha sido estudiada por Iván Hinojosa, 1999.

⁵ El FREDEMO, coalición integrada por Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el Movimiento Libertad, obtuvo en la primera vuelta el 27,6% de la votación, cosa que le otorgó una importante representación parlamentaria.

donde dirigentes y militantes pertenecían tanto a diferentes sectores sociales como también tenían distinta procedencia política e ideológica⁶. El gobierno, quizá consciente de esta debilidad, optó por afianzar relaciones con las FF.AA. y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), olvidando el apoyo recibido por distintas bancadas al momento, por ejemplo, de poner en marcha el programa económico. Luego de una instrumentalización del apoyo partidario en sus inicios y haber trabajado el pacto con las Fuerzas Armadas, es que se desatan las críticas contra el Congreso. Martín Tanaka ha considerado que éste es un momento clave en la historia contemporánea del país, pues tras varios años en los cuales predominó la confrontación partidaria, los partidos justamente habían logrado establecer acuerdos mínimos destinados a resolver, o por lo menos darle una salida política a la crisis⁷.

En tal sentido, desde octubre de 1990 la esencia de la relación entre el ejecutivo y el legislativo fue de un permanente enfrentamiento, y las tensiones originadas en la voluntad presidencial por afianzar un liderazgo, que ya se perfilaba como autoritario, se prolongarían a lo largo de 1991 para finalmente resolverse con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Las intenciones no declaradas, pero llevadas adelante de manera abierta y sistemática

por desacreditar y contribuir a deslegitimar los poderes legislativo y judicial, significaron ganarse el apoyo de una amplia mayoría de la sociedad, la cual expresaba su descontento con el funcionamiento de ambas instituciones. Ahora bien, es claro que la imposibilidad de llegar a un acuerdo permanente entre el gobierno y las formas de representación política existentes, tenía que compensarse con el acercamiento a otras instituciones que reclamaban más importancia luego de 10 años de combatir en una guerra interna. Las Fuerzas Armadas venían exigiendo ese reconocimiento desde los gobiernos anteriores, pero fue con Fujimori cuando lograron afianzar sus posiciones como actores políticos y establecerse como interlocutores del mismo nivel con las autoridades civiles⁸.

Fujimori al pactar con los altos mandos de las FF.AA. y priorizando sus relaciones con el ejército y los servicios de inteligencia, optó por entregarles espacios de participación política mayores a los obtenidos durante la década anterior. Una serie de reformas legales en el aspecto organizacional de estas instituciones permitieron, por ejemplo, mantener en sus puestos por tiempo indefinido a los altos mandos leales al pacto y contribuyó al sostenimiento del gobierno en momentos realmente críticos. Uno de los primeros hechos con los cuales se constata

⁶ Olano, 1999: 567.

⁷ Tanaka, 1996.

⁸ Rospigliosi, 1996.

la alianza política sellada entre el gobierno y las instituciones militares, fue cuando se entregó la seguridad interna a las FF.AA. al momento de dictarse las medidas de ajuste económico. La inseguridad presidencial en las instituciones del régimen democrático y su profunda desconfianza en la clase política, la que desde un comienzo definió como “tradicional” y “partidocrática”, condicionó su decisión de permitir la participación ampliada de las FF.AA. en la política nacional, sin que los demás integrantes del sistema político pudieran impedir que aquélla se fomentara⁹.

Ahora bien, y retomando lo señalado líneas arriba, los resultados obtenidos a nivel parlamentario por las distintas fuerzas políticas dieron forma a un Congreso que se constituía, según el gobierno, en uno de los principales obstáculos para adelantar el proyecto de pacificar el país o reformar el Estado. Aparentemente el gobierno había optado por una política conciliatoria, pues pactaba con las fuerzas representadas en el Congreso, pero la búsqueda de consensos fueron inmediatamente percibidos por el Presidente como un recorte a sus facultades y una constante traba para ejercer su autoridad. Esta situación, según argumentaba el jefe del ejecutivo, le impedía

alcanzar sus objetivos de corto y mediano plazo en los cuales se incluían la lucha contra el terrorismo, las impostergables reformas económicas y políticas, además de atender a la población que vivía en situaciones extremas.

Las intenciones no declaradas, pero puestas en práctica para deslegitimar a los poderes legislativo y judicial, significaron ganarse el apoyo de importantes sectores de la sociedad, los cuales desde hacía buen tiempo mostraban su descontento con el funcionamiento de ambas instituciones. De igual manera, al percibir que eran los partidos políticos y sus principales dirigentes los causantes de la mayor parte de los males que aquejaban al Perú, la sociedad en su gran mayoría aplaudía los desmanes presidenciales, pues así se sancionaba el accionar de las corruptas e ineficientes cúpulas de los partidos políticos. Recurriendo a los medios de comunicación y adelantando toda una estrategia sustentada en los mecanismos de legitimación que le otorga la videopolítica a los “outsiders”, Fujimori logró hacer pensar que la mejor forma de intermediación es la que se establece entre el presidente y los ciudadanos sin la presencia de los “funestos” partidos políticos u otras formas de organización

⁹ “Un caso especial de abdicación y pérdida de autenticidad democrática, que algunas veces se produce en un esfuerzo por reequilibrar un sistema en crisis, es el intento de líderes políticos de conseguir el apoyo del alto mando militar ofreciendo puestos en el gobierno o incluso el de primer ministro a militares destacados. Es una manera de pedir un explícito voto de confianza, pero indica que la lealtad normal e implícita de las fuerzas armadas está en duda” (Linz, 1987: 126). En este caso considero que la pérdida de lealtad de las FF.AA. se dio hacia el régimen democrático, no hacia el líder que las convocó.

que pudieran tener sectores de la sociedad no simpatizantes del gobierno¹⁰.

En medio de esta lógica de confrontación iniciada por el gobierno con los distintos actores políticos, la búsqueda por institucionalizar el pacto entre Fujimori y las FF.AA. se veía afectada por normas constitucionales que impedían a estas últimas utilizar la nueva estrategia anti-subversiva. Por un lado, se argumentaba que no les era permitido a los militares un libre desenvolvimiento en la represión de los movimientos subversivos al lado de un orden legal que planteaba la defensa irrestricta de los derechos humanos o la existencia de una prensa libre. Por otro lado, se tenía la intención del parlamento por mantener el control sobre el accionar contrainsurgente de las FF.AA. El pretexto para el golpe iba tomando forma.

No vamos a detallar los distintos acontecimientos que se sucedieron entre los primeros días de noviembre de 1991 y el 5 de abril de 1992, período en el cual se decidió la suerte de la democracia en el Perú; sólo mencionaremos que en noviembre, y utilizando las facultades dadas por el Congreso para legislar sobre pacificación, el gobierno promulgó 126 decretos legislativos que abarcaron temas de los más variados. El contenido de la mayor parte de ellos fue cuestionado por la representación parlamentaria, pues las autoridades civiles abdicaban de sus labores en la conducción de la guerra interna, además los militares

adquirían atribuciones que sobrepasaban cualquier control sobre sus funciones. La nueva legislación incorporaba varias exigencias planteadas por las FF.AA. desde que la guerra comenzó y traían consigo, por ejemplo, el definitivo desplazamiento de las autoridades civiles en las zonas de potencial conflicto.

El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció la formación de un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, suspendió la constitución de 1980 y el ejecutivo se constituyó como poder legislativo y judicial tomándose militarmente las sedes del Congreso y el poder judicial. En los días siguientes se destituyó a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y del Banco Central de Reserva así como al fiscal de la nación. Una vez consumado, el gobierno promulgó todas aquellas leyes que habían sido derogadas o modificadas por el cesado Congreso y nombró subalternos en la rama judicial y principales organismos de control. El camino había sido finalmente limpiado por el pacto cívico - militar y Fujimori pasaba a ser el único depositario de la esperanza ciudadana.

3. EL AUTORITARISMO

En los meses que van de mayo a julio de 1992, Sendero Luminoso lanzó una fuerte ofensiva en la capital. Una serie de decretos leyes se promulgaron, trayendo

¹⁰ Las ideas sobre *outsiders* y videopolítica las extraigo de Carina Perelli, 1995.

consigo la condena de cadena perpetua y el juicio por “tribunales sin rostro” para acusados de terrorismo, la reducción de la edad para ser procesados por ese delito, además se estableció que las acciones terroristas pasaban a ser consideradas como traición a la patria, los civiles podrían ser juzgados por tribunales militares en juicios sumarios y sin derecho a la apelación, se podía condenar en ausencia a los acusados de terrorismo y se reducía el derecho a la defensa de los inculpados. El accionar terrorista de Sendero Luminoso se constituyó en la condición que la sociedad aceptó ante el endurecimiento del marco legal antisubversivo. Pero al lado de esta aceptación también se requerían resultados tangibles inmediatos en la lucha contra el terrorismo, los mismos permitirían legitimar la dictadura. Esto se logró el 15 de septiembre con la captura del jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Esta fecha es sumamente importante pues trajo consigo un fortalecimiento en el control del Estado por parte de Fujimori y sus más cercanos colaboradores. El golpe adquiriría mayor legitimidad entre la población al demostrar que sin la presencia de los “políticos tradicionales” y un Congreso que retrasaba el accionar gubernamental, era posible combatir en mejores condiciones el terrorismo y, por lo tanto, derrotarlo de manera definitiva. Pero a pesar de estos logros, las relaciones con importantes mandos de las FF.AA. no eran del todo armoniosas. La creciente cooptación de los altos mandos y las mejoras

económicas que no llegaban, generaron contrariedad en el interior de las instituciones militares, sobre todo entre oficiales de alta graduación que no formaban parte del entorno presidencial. La conformación de una línea institucionalista se propuso restaurar la legalidad perdida y organizó un “contragolpe”, pero fueron descubiertos en noviembre de 1992, capturados sus dirigentes y entregados a la justicia militar.

Finalizando 1992 Fujimori había logrado desarticular la oposición en las FF.AA. y neutralizar la oposición interna y externa a los acontecimientos del 5 de abril. En la política interna, los partidos “tradicionales” no lograron recuperar la atención de una ciudadanía presa de la apatía y el descontento con la anterior democracia. La “nueva” ofrecía seguridad y solución a los problemas elementales de la gente. Quizá esto nos ayude a entender por qué el gobierno luego de calificar al anterior régimen como una “partidocracia”, se abocó a encontrar la forma de instrumentalizar esta nueva opinión pública, por lo tanto, lo plebeyo invisibilizado durante tanto tiempo, demandó y encontró en el naciente régimen parte de la solución a sus problemas cotidianos, por ejemplo, las comidas básicas preparadas por los habitantes de los barrios marginales Asimismo, se le reconocieron los mecanismos para afrontar problemas originados en la ineficiencia estatal, por ejemplo, las rondas campesinas en lo relacionado con la delincuencia común y la violencia política.

La oposición en el exterior fue neutralizada al alcanzarse un acuerdo con la “comunidad internacional” en la reunión de la Organización de Estados Americanos realizada en Bahamas a fines de mayo. Aquí el gobierno se comprometió a elaborar un cronograma de retorno a la institucionalidad democrática, el cual consistía en la convocatoria a elecciones para un nuevo congreso, ahora también constituyente, y tendría la labor no sólo de legislar sino también elaborar una nueva constitución, la cual sería aprobada en un referéndum. Ahora bien, sin haber de por medio un acuerdo con los directamente comprometidos en la política nacional, es decir los partidos de oposición, Fujimori pactó con la OEA un proceso de “retorno a la democracia”, consistente en que antes de finalizar ese año se organizarían elecciones como procedimiento esencial para recuperar la democracia.

En este acuerdo no se tocaron temas igualmente importantes en un proceso de transición: independencia de los poderes mediante la reposición de los funcionarios ilegalmente separados, neutralidad de las Fuerzas Armadas, salida de los funcionarios de alto nivel nombrados por decreto gubernamental y de los mandos militares comprometidos en el golpe, cese en la persecución de opositores políticos, derogatoria de los decretos leyes promulgados en el período. Yendo en contra de la resolución

1080 aprobada en Santiago de Chile el año anterior, la cual obligaba a la imposición de sanciones para cualquier quebranto del orden constitucional en los países que conforman el sistema interamericano, lo pactado en la reunión de cancilleres significó avalar la salida golpista como solución de la crisis peruana¹¹.

Las elecciones se realizaron el 22 de noviembre sin la presencia de agrupaciones políticas como Acción Popular, Movimiento Libertad, APRA e Izquierda Unida, las mismas que desde el discurso oficial habían organizado la “partidocracia”. Todas ellas se ausentaron de la competencia convocada por el régimen, argumentando falta de garantías para una elección realmente limpia y transparente, abierta y competitiva. El gobierno obtuvo la mayoría parlamentaria sin problemas a través de CAMBIO 90 y el recién fundado Nueva Mayoría con el 49,2% de la votación. El segundo lugar fue ocupado por el Partido Popular Cristiano liderado por Lourdes Flores con 9,8%, seguido por el Movimiento Independiente Renovación con el 7,1% y el Frente Independiente Moralizador con una cifra similar. Seguían grupos residuales tanto de izquierda como de derecha con una escasa votación.

Alcanzada la mayoría en el Congreso con el respaldo del Movimiento Renovación y la Coordinadora Democrática, el gobierno adquiriría la suficiente libertad

¹¹ Olano; 1999.

para continuar su proyecto. Habiendo cumplido con la OEA y algunos de los protagonistas locales e internacionales por sanear la situación, el ejecutivo sólo tenía que monitorear el recién elegido CCD para que la nueva constitución, y luego de seis meses de trabajo, incorporara artículos que satisficieran “...las exigencias y deseos de Fujimori como la pena de muerte, la reelección presidencial inmediata, el referéndum y la posibilidad del cierre del Parlamento (unicameral), por única vez en un período, a juicio del Presidente”¹². Con la nueva constitución se fortalecía el presidencialismo y se crearon las condiciones para una institucionalidad autoritaria en el Perú. Esto quedó demostrado con los acontecimientos habidos en el período comprendido entre julio de 1995 y mayo del 2000: es la primera y segunda reelección de Fujimori, esta última teniéndolo como candidato único.

Ahora bien, la constitución fue aprobada en un referéndum llevado a cabo el 31 de octubre de 1993 con un 52,3% de los votos válidos. La oposición obtuvo el 47,7 con lo cual el gobierno completaba el ciclo de legitimación. Fujimori pudo ser nuevamente candidato para las elecciones generales a realizarse en abril de 1995, elecciones en las cuales prácticamente barrió con el 64,42% de los votos válidamente

emitidos a su más cercano competidor, el exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Recalquemos que la nueva constitución fue aprobada por una diferencia no muy grande en el referéndum, pero aún así el régimen entraba en su “fase fundacional”, con el consentimiento de la opinión pública nacional y el aval del sistema internacional, aparentando un cariz democrático basado en sucesivos procesos electorales¹³.

4. REFORMA ECONÓMICA Y AJUSTE ESTRUCTURAL

El candidato Alberto Fujimori nunca propuso un programa económico en la campaña electoral, no se le conocía equipo económico y esto era explicable en tanto sus aspiraciones políticas eran ingresar al Senado. Convertido en el “fenómeno político de la década”, Fujimori arma un equipo en donde sus integrantes mantenían una sola coincidencia programática: no tenían idea de qué hacer para afrontar la situación económica que dejaba el gobierno aprista. En la campaña para la segunda vuelta, y sobre todo en el debate con Mario Vargas Llosa, propuso el “no shock” y el “ajuste expansivo” para sacar al país de la crisis. Una vez posesionado como presidente y yendo en contra de lo dicho

¹² Tuesta, Ob. cit.: 43.

¹³ La *fase fundacional* de un régimen autoritario “... se define en términos de un proyecto nuevo de sociedad, de un modelo de desarrollo, de un nuevo sistema de relaciones sociales y de un modelo político a futuro que se perfila como el sucesor del régimen...” (Garretón, 1984: 30).

como candidato, optó por implementar el 8 de agosto de 1990 un programa de ajuste en su versión más ortodoxa. El ajuste estructural promovido por el Consenso de Washington se puso en marcha ante la ausencia de una política económica alternativa, donde el objetivo fundamental fue corregir las graves distorsiones de la economía peruana, luego del frustrado experimento heterodoxo realizado por el gobierno del partido aprista (PAP).

No voy a estudiar en detalle el programa y las medidas económicas que se aplicaron durante el gobierno de Alan García, sólo mencionaré que el programa estuvo muy relacionado con el modelo estructural-desarrollista de la CEPAL, el cual se puso en marcha con importantes distorsiones de lo que pudo haber sido la concepción original. El programa podemos resumirlo en lo siguiente: es una propuesta fundada en el modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento del mercado interno, lo cual debía darse mediante la defensa de la producción industrial a través de medidas como el alza de los aranceles a los productos importados y el establecimiento de tasas de crédito subsidiado. De igual manera, se asumió el tipo de cambio fijo y diferenciado de acuerdo con el destino dado a la divisa. Por otro lado, y desoyendo recomendaciones elaboradas por críticos de este proyecto, se tuvo un desmesurado aumento del gasto fiscal sin la correspon-

diente ampliación de la base tributaria. Además, se establecieron exoneraciones en el pago de impuestos creados y por crearse para los sectores “modernos” de la economía, sobre todo el industrial. Por último, el gobierno trató de reducir la dependencia externa mediante el desconocimiento de los compromisos adquiridos con el sistema financiero internacional¹⁴.

En tal sentido, y a raíz de la política económica “*perversamente*” populista de Alan García¹⁵, el experimento heterodoxo trajo graves consecuencias para la economía nacional. Hacia mediados de 1990 se tenía un país en el fondo del abismo, pues las principales variables macroeconómicas indicaban:

- a. La inflación en niveles del 2,775% para 1989 y 7,481.7% en 1990, año con tasas mensuales del 30%, y alcanzó en julio el 63,2%.
- b. Las reservas internacionales netas negativas fueron de 168 millones de dólares en julio de 1990.
- c. El crecimiento del producto interno bruto había sufrido una reducción del -8,8% en 1988 y -11,6% en 1989.
- d. La presión tributaria había pasado del 12% del PIB en 1985 al 5,4% en 1989.

El problema de la deuda externa generó una situación bastante complicada. Las banderas del antiimperialismo como parte

¹⁴ Lago, 1991.

¹⁵ López, 1991.

de una política exterior basada en aspectos doctrinarios del partido aprista cuando fue gobierno, condujo al aislamiento y posterior separación de Perú del sistema financiero internacional. Afirmamos, entonces, que la política exterior del gobierno aprista en sus relaciones económicas estuvo marcada en la confrontación, ideológicamente sustentada en la denuncia de Alan García sobre las actividades que realizaban el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial¹⁶. La inelegibilidad con que fue sancionado el Perú al desconocer sus compromisos con la banca internacional, se reflejó en la imposibilidad del Estado para acceder a créditos externos en momentos que la caja fiscal agotaba sus recursos. Los flujos de capital foráneo se vieron reducidos a la ayuda humanitaria mientras que la deuda externa, “*principal instrumento de la dominación imperialista*”, en los términos utilizados por el presidente, no dejó de aumentar. En 1985, año en que García asumió el gobierno, la deuda era de 12,820 millones de dólares, en 1988 era ya de 16,215 millones para llegar a ser en 1989 de 17,058 y en 1990 de 18,239 millones de dólares. Las tres últimas cantidades equivalían al 69,8%; 78,7% y 84,3% del PIB. Como sólo se pagaba a los

proveedores, el servicio ascendía al 4,5%; 5,8% y 5,9% de las exportaciones anuales respectivamente¹⁷.

Las distorsiones de la economía peruana eran tan graves que las opciones eran realmente muy pocas. Acogiendo las ideas inmersas en las políticas económicas aplicadas en América Latina a partir de 1985 (caso Chile y Bolivia), la crisis no podría solucionarse si no se llevaba adelante un programa de ajuste económico en su versión ortodoxa. Fujimori quedó convencido de las bondades de este programa en el viaje que realizó a los Estados Unidos y el Japón poco antes de asumir el mando, en un periplo donde se incluyeron negociaciones con los gobiernos de Washington y Tokio más los organismos financieros multinacionales, en la perspectiva de conseguir el apoyo político y financiero necesario para poner en marcha el ajuste. En tal sentido, el ajuste estructural se inició trazándose los siguientes objetivos: el control inmediato de la inflación a través de la eliminación del déficit fiscal, recuperar un mínimo de reservas internacionales para comenzar a pagar la deuda externa pendiente y, por último, buscar la reinserción en el sistema financiero internacional para nuevamente

¹⁶ “El énfasis puesto en la variable ideológica calificó el carácter de la conducción externa de los intereses nacionales. Aquélla se resumió en lo que el gobierno del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) entendió como ‘antiimperialismo’, integración latinoamericana (en su versión valorativa) y ‘solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo’... la dimensión antiimperialista condicionó la percepción del tema de la deuda no como uno grave o tratable por la vía ordinaria, sino como el ‘gran tema del Perú y de la América’ correspondiente a la ‘fase predominantemente financiera del imperialismo’...” (Deustua, 1991: 168-169).

¹⁷ BCR, 1993.

acceder a los créditos procedentes de la banca privada o los organismos multilaterales.

Las medidas pactadas por el gobierno de Fujimori con el FMI y el BM, significaban un cambio radical en relación con la política económica de Alan García. Lo que ha sido definido acertadamente como el “péndulo económico”¹⁸, esta vez se inclinó hacia las reformas liberales promovidas por las instituciones multilaterales. Ahora bien, es necesario señalar que el programa también consideró las siguientes medidas como parte del intento, una vez más, por modernizar la economía nacional, teniendo como trasfondo el ideologizado proceso conocido como globalización: la apertura internacional, reducir las barreras arancelarias con la intención de fomentar la competitividad de los productos nacionales, establecimiento de precios reales al eliminar la mayor parte de subsidios a la producción y consumo locales. Además, propone redefinir el papel del Estado reduciendo su capacidad para regular e intervenir en la economía, reduciéndolo a la satisfacción de las necesidades básicas como la educación, la salud, la seguridad y el mejoramiento de la infraestructura.

La lógica manifiesta en el ajuste estructural es que el mercado debe ser el orientador del “desarrollo” en las ahora llamadas “economías emergentes” y constituirse, también, en el principal asignador

de recursos. Esto es apostarle a que las condiciones de vida de la mayoría de la población mejorarán con el crecimiento de la economía fruto de la estabilización obtenida. Aunado a esto último, las instituciones internacionales y sus representantes locales, serán desde ese momento las encargadas de garantizar el mantenimiento del orden macroeconómico. Ahora bien, la implementación del modelo ortodoxo liberal es quizá la más importante condicionalidad “sugerida” por el FMI y el BM para comenzar a renegociar la deuda externa, pero es también el primer paso destinado a reconvertir la economía y darle un cariz eminentemente exportador. A partir de la competencia con el producto importado, la producción nacional se garantiza a sí misma un posicionamiento en importantes segmentos del mercado internacional, los “nichos del mercado”, con el criterio sobre todo ideológico de que aquel funciona libre de interferencias políticas.

En tal sentido, la nueva política económica se propone cambiar el modelo de desarrollo y el régimen de acumulación predominante en el Perú luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Lo primero es abandonar el modelo de *desarrollo del mercado interno vía la industrialización por sustitución de importaciones*, para darle paso al *modelo de promoción de las exportaciones*. Esto es convertir en una plataforma exportadora, pensando

¹⁸ González y Samamé, 1994.

quizá en obtener una versión andina de los países de industrialización reciente. Lo segundo es el intento por cambiar la fallida versión latinoamericana del *régimen de acumulación fordista*, para facilitarle la llegada al nuevo régimen de acumulación basado en la *especialización flexible*¹⁹. La presencia de este régimen de acumulación en la economía del Perú se pudo ver favorecido por una condición existente con cierta anterioridad, la que Charles Sabel considera como favorable para emprender un nuevo proceso de industrialización en el Tercer Mundo: la informalidad²⁰.

El programa consideraba igualmente el largo plazo como el espacio temporal necesario para que cumpla con los objetivos trazados, pero era necesario tomar urgentes medidas de estabilización ante la gravedad de la situación existente²¹. Por tal motivo, el ajuste de precios relativos como primera etapa del ajuste estructural, se dio por la expeditiva vía del “shock”, debido sobre todo, a las capacidades adquiridas por el gobierno en sus negociaciones con el apoyo obtenido en el Congreso a su plan de ajuste, como también por el pacto

establecido con las FFAA. Una definición bastante acertada de cómo se resuelve una coyuntura tan especial es la que nos dan Eugenio Tironi y Ricardo Lagos, en el sentido que *“Un gobierno fuerte (ya sea porque dispone de un amplio apoyo electoral, porque está respaldado por una coalición mayoritaria, o porque cuenta con el sostén de fuerzas armadas poderosas) tendrá mayores posibilidades de llevar a cabo una política de shock, quebrando eventualmente la resistencia de actores sociales débiles”*²².

Una vez puestas en práctica las medidas de ajuste de los precios relativos, el gobierno pasó a dictar las leyes destinadas a reformar la estructura productiva del país, lograr la reinserción definitiva en el sistema financiero internacional, acelerar la llegada del capital extranjero y “modernizar” el aparato del Estado. La secuencia de objetivos que forman parte de la segunda etapa del programa de ajuste estructural²³, se inició bajo la conducción de Carlos Boloña a partir de febrero de 1991 y con el fin de alcanzar los objetivos pactados con las instituciones financieras internacionales, se dictaron medidas destinadas a adelantar

¹⁹ “Flexible accumulation, as I shall tentatively call it, is marked by a direct confrontation with the rigidities of fordism. It rests on flexibility with respect to labour process, labour markets, products and pattern of consumption. It is characterized by the emergence of entirely new sectors of production, new ways of providing financial services, new markets, and above all, greatly intensified rates of commercial, technological, and organizational innovation.” (Harvey; 1990: 147).

²⁰ Sabel, 1994: 157.

²¹ Banco Mundial, 1992

²² Tironi y Lagos, 1991.

²³ Las etapas del ajuste estructural en el Perú se encuentran en la carta de intención que firmó el gobierno del Perú con el FMI, documento que comprendía las medidas económicas para el período 1990-1992.

los principios contenidos en el Consenso de Washington. Aquí se contemplaron leyes destinadas a fomentar y garantizar la inversión privada sea nacional o extranjera, entre las cuales tuvimos: la reforma del comercio exterior, de promoción a la inversión, de zonas francas y tratamiento especial, ley de promoción a la inversión privada en las empresas propiedad del Estado, ley de bancos y seguros, de minería e hidrocarburos. Por otro lado, las garantías al capital foráneo se vieron reforzadas con la firma de acuerdos con las aseguradoras de inversiones norteamericanas en el extranjero, OPIC y MIGA. El nuevo marco jurídico permitió la inversión en cualquier sector de la economía, pues se prohibieron los monopolios públicos

Ahora bien, consideramos que el hecho de llevar adelante el ajuste estructural en su versión más radical, sin considerar el impacto que tendría sobre los sectores sociales más desfavorecidos, significó para el gobierno recuperar parte de la credibilidad perdida ante los gobiernos de los países desarrollados y las instituciones financieras internacionales. El programa económico se implementó sin cuestionar las “recomendaciones” hechas por el FMI y el BM, pero tal como lo hicieron ver

posteriormente las propias instituciones financieras, no se necesitaba que el ajuste fuera tan drástico. En todo caso, la búsqueda de una relación que privilegiara el acercamiento con las democracias occidentales y el sistema financiero internacional, obtuvo un nivel de reconocimiento bastante alto con la formación del primer grupo de apoyo y en la cantidad de dinero con que cada país cooperó²⁴. La alta dependencia que se generó en el diseño y puesta en práctica del programa económico, se sumó a la voluntad presidencial por alcanzar la reinserción en el sistema económico internacional. Dependencia y voluntad política incrementaron la vulnerabilidad de la posición peruana al interior de un régimen donde, supuestamente, predomina la interdependencia: el sistema financiero internacional. Ahora bien, para entender lo que es un régimen internacional recorro a la definición dada por Stephen Krasner:

“Los regímenes son principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores. Los principios son un conjunto coherente de afirmaciones teóricas acerca de cómo funciona el mundo. Las normas especifican los estándares generales

²⁴ El grupo de apoyo es la reunión de países para facilitarle al solicitante su reinserción en el sistema financiero internacional. Cada integrante cotiza una cantidad de dinero que es destinada a saldar cuentas ya sean pendientes o de vencimiento inmediato. La intención era lograr que el Perú adquiriera la condición de elegible y accediera a los créditos que los organismos multinacionales tienen destinados para el financiamiento del desarrollo. El primer grupo de apoyo estuvo formado por Japón que cooperó con 400 millones de dólares, Estados Unidos con 350 millones, Alemania con 150 millones; luego con cifras menores España, Holanda, Italia, Suiza, Francia, Canadá y los países del Grupo Andino.

*de conducta. Las reglas y los procedimientos de toma de decisión se refieren a las prescripciones específicas de conducta en áreas claramente definidas... Los regímenes definen derechos de propiedad básicos. Establecen esquemas de conducta aceptables. Coordinan la toma de decisión*²⁵.

La reinserción era el objetivo principal por alcanzar, así tal logro significara eliminar importantes espacios, sobre todo aquellos que se ubican en esa definición bastante convencional de soberanía y que involucran decisiones relacionadas con el diseño e implementación de un plan de gobierno o la aceptación de un modelo de desarrollo económico. Una de las consecuencias inmediatas fue el incremento de la vulnerabilidad a las condicionalidades, pues éstas son parte integrante de su política exterior formuladas desde los estados que mantienen una presencia hegemónica al interior del régimen internacional, creándose así una situación propicia para sugerir cambios en la formulación de una política interna. Para concluir esta parte, diremos que el ajuste así como fue pactado por el gobierno con las instituciones multilaterales de crédito, FMI y BM, obtuvo mayor viabilidad al lograr el respaldo de los más importantes agentes económicos del país, diversas organizaciones empresariales que con esta decisión y quizá sin saberlo, ataron su destino al proyecto autoritario.

5. REELECCIÓN Y CAÍDA

Luego de la primera reelección de Fujimori en abril de 1995 con el 64,42% de la votación, derrotando en la primera vuelta a Javier Pérez de Cuéllar, en lugar de acercarse a la oposición en un momento de legitimidad interna y reconocimiento internacional por unas elecciones que la OEA no cuestionó, optó por endurecer su administración con una estrategia diseñada a destruir aquellas personas u organizaciones que se mantuvieran en la oposición. Todo esto se inicia con la “*ley de interpretación auténtica*”, norma donde se “interpretó” el artículo 112 de la constitución promulgada en 1993. Esta permitía la reelección inmediata por una sola vez y en la ley se estableció que Fujimori había sido elegido por primera vez con la nueva constitución en 1995, por lo tanto no era aplicable la restricción al presidente y futuro candidato. Así se permitía una segunda reelección. El Tribunal de Garantías Constitucionales declaró la ley inaplicable y el gobierno destituyó a los magistrados ponentes. En los meses que siguieron a esta particular interpretación fueron intervenidos la rama judicial y el ministerio público. Al mismo tiempo se reorganizó el sistema electoral creando instituciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

²⁵ Krasner, 1989: 14.

Otra prueba de la voluntad gubernamental por afianzarse en el poder fue la organización de un movimiento político “independiente”, para así participar en las elecciones municipales. La tarea asignada a Vamos Vecino fue ganar la mayor cantidad de concejos distritales y provinciales en las elecciones que se llevaron a cabo en noviembre de 1998, para después ponerlos al servicio de la reelección. Igualmente, permitía medir fuerzas en el ámbito nacional con “Somos Perú”, movimiento fundado por el alcalde de Lima y en ese momento alternativa presidencial de la oposición, Alberto Andrade.

Éste es quizá el momento donde las prácticas populistas hacen su reaparición, pero llegando a extremos de perversión absoluta. Utilizando el aparato y los recursos del Estado, el gobierno se dedicó a la tarea de comprar a todo aquél que pudiera ser utilizado en favor de la candidatura presidencial. Políticos de la oposición, alcaldes y congresistas, empresarios nacionales y extranjeros, artistas y medios de comunicación se pusieron al servicio del Estado y en aras de proseguir con la tarea de organizar una nueva sociedad y un nuevo sistema de relaciones sociales que fueran a su vez funcionales al régimen, los estrategias gubernamentales se encaminaron a degradar tanto la actividad política y la función pública, como también la dignidad y la moral de aquéllos que se atrevían a desafiar el orden autoritario. Como parte de las actividades corruptoras que se pusieron en práctica desde el Estado

se destaca lo sucedido con los medios de comunicación, pues el control de éstos se volvió un objetivo impostergable en la estrategia por fortalecer el autoritarismo.

En la era de la política mediática es posible que desde los medios se construyan o rehagan símbolos, los mismos que pueden ser referentes destinados a la consolidación de una cultura política de tipo democrático, como también es posible que se organicen y difundan discursos dirigidos al servicio exclusivo de una persona o el fortalecimiento de un proyecto político como el fujimorista. El gobierno optó por el envilecimiento de la programación televisiva y radial con la complicidad de los propietarios, quienes terminaron por entregar su independencia comunicativa. Pero a diferencia de las elecciones de 1995, el proceso electoral destinado a legitimar un tercer mandato de Fujimori no garantizaba su triunfo. Ahora estaba bajo vigilancia internacional y con importantes sectores de la sociedad movilizados. Como prueba de lo primero, se tenía desde enero del 2000 a la misión de observadores de la OEA liderada por Eduardo Stein, la cual y a diferencia de anteriores misiones estaba dedicada a evaluar el proceso electoral completo. Lo segundo se podía observar en la movilización ciudadana activada desde mediados de 1997, momento en que el Congreso decidió no avalar un referéndum por iniciativa ciudadana y en donde se preguntaría sobre una segunda reelección de Fujimori. Obviamente, hubo un previo cambio de la norma constitucional que

legitimaba la participación ciudadana a través de los mecanismos de la democracia directa, por una ley en la cual se impuso la aprobación del Congreso para cualquier iniciativa procedente de la sociedad.

Los planes del gobierno se vieron seriamente afectados cuando se difundieron los primeros resultados de la elección presidencial. Las encuestas a boca de urna dieron una votación del 49% a Alejandro Toledo, resultados que prácticamente le permitían ganar la Presidencia de la República en primera vuelta con una diferencia de 8 puntos sobre su más cercano competidor. De manera inmediata se puso en marcha el plan para cambiar los resultados y, por medio del control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la manipulación del soporte informático, se hizo posible que los resultados se voltearan hacia las 8 de la noche, cuando los resultados oficiales otorgaron la victoria a Fujimori con aproximadamente 9 puntos de ventaja sobre el candidato opositor. Los intentos de la ONPE por hacer ganar a Fujimori en la primera vuelta, 49,96% de la votación según los resultados finales dados casi 10 días después del acto electoral, se frustraron debido a la confluencia de varios factores. En primer lugar, la oposición de la mayor parte de los partidos políticos y movimientos que habían competido en las elecciones, tales como el Partido Aprista Peruano, Acción Popular, Somos Perú, Solidaridad Nacional y Perú Posible, liderados unitariamente por Alejandro Toledo. En segundo lugar, la inmediata y masiva resistencia

ciudadana contra el fraude electoral y, por último, la categórica declaración del Jefe de la Misión de Observadores de la OEA quien en su informe final calificó el proceso como lleno de irregularidades. El gobierno ya sin mucho margen de maniobra, debido a la movilización ciudadana y la presión internacional, se vio obligado a ceder, pero persistió en su errada conducta de dirigir el proceso sin cambiar el estado de cosas existente.

Inmediatamente se puso en marcha una nueva estrategia destinada a garantizar el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta. En medio de las calumnias dirigidas contra la oposición, tanto ésta como la misión de observadores sugirieron algunos cambios para la segunda vuelta con la finalidad de tener mayores garantías en una competencia electoral. Entre otras cosas se planteó que evaluadores externos supervisarán el soporte utilizado por la ONPE, se llevara a cabo una depuración del padrón electoral y se postergara la fecha de la segunda vuelta para el 11 de junio. De igual manera se sugirió que en la organización del proceso se tuviera la participación de instituciones como por ejemplo la Asociación Civil Transparencia o la Defensoría del Pueblo. El gobierno se negó a poner en práctica estas sugerencias y argumentó que no podía intervenir debido a la “independencia” y “autonomía” de que gozaban los organismos electorales, los cuales decidían de acuerdo con las leyes establecidas. En consecuencia, Alejandro Toledo renunció y la Misión de Observa-

dores de la OEA decidió retirarse del país. Fujimori, quedó como candidato único y en el mejor estilo de los dictadores latinoamericanos de décadas pasadas, “ganó” la segunda vuelta realizada el 28 de mayo del 2000 con cerca del 80% de la votación.

La reelección difícilmente podía ser aceptada, pero la OEA en su reunión de cancilleres realizada a comienzos de junio en la ciudad de Windsor, Canadá, decidió avalarla a pesar del informe de la misión que cuestionaba el proceso en su totalidad. Con el apoyo de Brasil, México y Venezuela, el gobierno peruano logró evadir una sanción internacional enmarcada en la resolución 1080, pues los estatutos de la OEA consideran que este tipo de sanciones debe ser aprobado de manera unánime, teniendo de por medio un golpe de Estado. Como una manera de contener la protesta internacional, el gobierno se comprometió a implementar reformas en el orden jurídico vigente, las cuales serían negociadas con la oposición en una mesa de diálogo supervisada por la OEA. Se conformó la misión a cargo del secretario general César Gaviria y el ministro de relaciones exteriores canadiense Lloyd Axworthy, y desde el 29 de agosto esta misión se encargó de mediar una negociación entre el gobierno y la oposición para así proponer medidas destinadas a fortalecer

la “institucionalidad democrática”²⁶.

Luego de conocerse esta decisión se produjo un acto de subordinación de las FF.AA. al presidente sin haberse posesionado, por lo tanto, pocas esperanzas se tenían de hacer retroceder al régimen. Aun así, una pequeña ilusión surgió al conocerse la conformación del Congreso: el oficialista Perú 2000 no había alcanzado la mayoría parlamentaria, pero a mediados de junio se inició un proceso que sólo finalizó en los días previos a la (re)toma de posesión. En la tercera semana de julio, la ciudadanía fue sorprendida por la mayoría que el gobierno había obtenido producto de un fenómeno que se conoció como el “transfuguismo”. Congresistas elegidos en las listas de los partidos de oposición se habían pasado al oficialismo sin ningún tipo de explicaciones. Si con la manipulación de los resultados obtenidos en la votación parlamentaria, el gobierno había obtenido 52 parlamentarios de un total de 120, el “transfuguismo” elevó dicha cantidad a 75 cuando se eligieron las mesas directivas.

Alberto Fujimori continuó en el control del gobierno en un ambiente de aislamiento internacional y movilización de los sectores de la oposición, más aún cuando el candidato “derrotado” había convocado a la ciudadanía y partidos de oposición a pronunciarse en contra de

²⁶ La resolución 1080 aprobada en la reunión de cancilleres que tuvo lugar en Santiago de Chile en 1991, estableció que cualquier ruptura del orden constitucional supondría inmediatamente acciones tendientes a cooperar en el restablecimiento de la institucionalidad perdida. Como no funcionó luego del golpe de Estado dirigido por Fujimori, la opinión de la OEA y sus veedores nunca influyó realmente en el accionar gubernamental.

la perpetuación de la dictadura, organizando la “*Marcha de los Cuatro Suyos*”²⁷. Esta movilización se ha constituido en el elemento fundamental para entender la derrota política del autoritarismo, pues con ella quedó demostrado el hartazgo de importantes sectores de la población hacia una forma de gobernar sustentada en la arbitrariedad y el despotismo. En medio de la ceguera gubernamental se iba construyendo el escenario de la crisis final y quizá un salto adelante, como ya se había hecho antes, podía incrementar la legitimidad del régimen. Como veremos, en aras de recuperar su deteriorada imagen internacional, el gobierno recurrió al expediente de mentir sobre un aspecto que directamente comprometía la seguridad en la región.

El 29 de agosto, justo el día en que se iniciaba el diálogo entre gobierno y oposición auspiciado por la OEA, el gobierno anunció el desbaratamiento de una red de traficantes de armas. Según el anuncio presidencial, se había descubierto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaban siendo abastecidas de armamento ruso comprado a las fuerzas militares de Jordania. En este tráfico de armas estaban involucrados altos funcionarios del gobierno jordano, quienes mantenían estrechos vínculos con traficantes de armas en Ucrania. Los integrantes de la coalición autoritaria argumentaron que

gracias al trabajo de sus servicios de inteligencia, el gobierno peruano demostraba su compromiso en el combate contra el terrorismo internacional y el narcotráfico en la región²⁸.

Pero sucedió lo imprevisible. El gobierno jordano, aliado estratégico de EE.UU. en asuntos de seguridad en el Medio Oriente, demostró con documentos que las armas habían sido vendidas al ejército del Perú. La venta se hizo previo informe a la CIA quien en última instancia autorizó la transacción comercial. Las armas nunca llegaron a las instalaciones militares peruanas y más bien se comprobó que el ejército peruano se las había entregado a las FARC. El gobierno de Colombia protestó airadamente y Vladimiro Montesinos, hasta ese momento consentido de la comunidad de inteligencia norteamericana, cayó en desgracia ante sus jefes inmediatamente superiores.

Aquí es donde ubicamos la importancia del vídeo propalado el 14 de septiembre, el cual se constituyó en el detonante de la crisis final. En la era de la política mediática, tan bien utilizada por el gobierno para someter política y sociedad a sus intereses, una filmación clandestina y su propagación por el único canal de televisión que mantenía independencia informativa, fue el acontecimiento que le cambiaría el curso al proyecto autoritario. La imagen del gobierno mejoraría

²⁷ Los Suyos fueron las regiones en que estuvo dividido el antiguo imperio de los Incas: el Tahuantisuyo.

²⁸ Cotler, 2000: 69 y ss.

si *“se lograba una mayoría de 70 y 75 parlamentarios... sólida y pensante...”* le argumentaba Montesinos al parlamentario de Perú Posible, Alberto Kouri, mientras le entregaba una suma de dinero para que se cambiara de partido. Las diferencias surgidas a raíz de la divulgación del vídeo llevaron a la ruptura del pacto autoritario e inmediatamente sus integrantes se abocaron a buscarle una salida ordenada a la crisis. El 16 de septiembre, Fujimori convocó a un proceso electoral en el que no participaría, de igual manera ordenó la desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional y le exigió la renuncia a Montesinos, sin prever que la ausencia del asesor lo dejaba como una entealequia en manos de un futuro previsible: su destitución y posterior encauzamiento una vez que el Congreso y el poder judicial recuperaran su independencia.

A partir de ese momento sólo se preocupó por encontrarle una salida a su situación personal. La encontró en una cumbre presidencial de la APEC realizada en el Sultanato de Brunei, iniciando un viaje sin la intención de retornar al país que había gobernado 10 años. La última escala de su travesía lo condujo al país de sus ancestros donde permaneció gracias a la adquirida nacionalidad japonesa. El 19 de noviembre del 2000 renunció a seguir ocupando la presidencia del Perú luego de haber hecho hasta lo indecible para mantenerse en ella. Dos días después fue destituido en el Congreso por “incapacidad moral”, y el régimen que tan

obstinadamente construyó en los años que se mantuvo al frente del ejecutivo, se desmoronó cual castillo de naipes. Vicepresidentes y ministros renunciaron sin tener al frente la persona que los había nombrado y el soporte político del tercer gobierno de Fujimori, la alianza electoral “PERÚ 2000” puso punto final a sus actividades, sin dejar rastros de ningún tipo.

El presidente del congreso y militante de Acción Popular, Valentín Paniagua, fue nombrado presidente y organizó su gobierno con personajes procedentes de distintas tiendas políticas y personalidades independientes. La mesa de diálogo auspiciada por la OEA se desactivó sin haber adquirido real trascendencia en la restauración de la democracia en el Perú, peor aún, la imagen de aquella institución quedó sumamente deteriorada entre la opinión pública peruana, pues pasó a ser percibida como encubridora de los desvaríos acontecidos durante el fujimorismo. Los partidos políticos reiniciaron sus actividades con las miras puestas en las elecciones presidenciales y parlamentarias a realizarse el 8 de abril del 2001 y el Perú inició, una vez más, un proceso destinado a recuperar la democracia.

6. LA TRANSICIÓN

Valentín Paniagua fue nombrado presidente del gobierno de transición el 22 de noviembre del 2000 luego que Fujimori fuera destituido del cargo. Militante de Acción Popular desde los años sesenta,

Paniagua había sido ministro de justicia y presidente de la Cámara de Diputados cuando funcionaba el sistema bicameral. Su llegada a la presidencia del Congreso se debió al apoyo de diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria y así pudo ser elegido sin mayores dificultades. Paniagua asumió la responsabilidad de organizar no sólo un nuevo proceso electoral, sino también iniciar el desmonte del régimen autoritario, y en aras de garantizar la estabilidad política en el corto plazo, el nuevo gobierno se conformó con militantes de diversos partidos y personalidades independientes, destacándose el nombramiento de Javier Pérez de Cuéllar como presidente del Consejo de Ministros y ministro de relaciones exteriores.

En un contexto marcado por el colapso de la dictadura, la incredulidad y el desconcierto de la población ante la magnitud de los delitos cometidos por el fenecido régimen, el gobierno de transición tuvo que afrontar problemas que requerían de solución inmediata. Dada la premura de tiempo se abocó a enfrentarlos contando con el apoyo de los partidos representados en el Congreso. En primer lugar, había que reinstitucionalizar las fuerzas armadas y policiales acabando con la corrupción y politización de los altos mandos, cosa que se vio facilitada por el alto grado de ilegitimidad de las instituciones militares y en donde la capacidad de respuesta militar a la decisión del gobierno fue prácticamente nula. En segundo lugar, la necesidad de reconstruir las instituciones encargadas

de la administración de justicia en el país, las cuales habían sido igualmente politizadas desde el poder ejecutivo. Teniendo de por medio estos antecedentes, se empezó nombrando nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y dicha institución pasó a destituir jueces y fiscales que habían sido designados de manera irregular.

En tercer lugar, se propuso recuperar la credibilidad de los organismos electorales para así garantizar una elección transparente, nombrando nuevo personal. Asimismo, se restableció el distrito electoral múltiple lo cual significaba que los departamentos podían elegir sus representantes luego de 8 años de haberse tenido el distrito electoral único. En cuarto lugar, el gobierno de Valentín Paniagua decidió que el Perú volviera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así se hizo posible retomar la legislación internacional en cuestiones relacionadas con la vigencia y respeto de los derechos humanos. Quinto, la lucha contra la corrupción sólo podía legitimarse si es que los dirigentes de la organización que controló el gobierno del Perú eran sometidos a la justicia, cosa que se logró muy rápidamente con la captura de Montesinos en Venezuela.

Tales fueron algunas de las tareas realizadas por el gobierno de transición en los 8 meses que duró. Como se habrá notado, hemos enfatizado en el componente institucional durante el proceso, pues éste fue el objetivo principal de Valentín Paniagua y sus colaboradores. Otros

aspectos igualmente importantes para la buena marcha de cualquier gobierno, por ejemplo, el diseño de una política económica alternativa, no se planteó quizá por no contar con el tiempo suficiente para elaborarla, o por no tener discrepancias con la actual. En esta fase de transición fue destacable la labor de la mayoría de los partidos políticos, pues mostraron un grado de madurez poco conocida y necesaria para contribuir en una transición sin sobresaltos. Los partidos comprendieron la necesidad de unirse para enfrentar el desmonte del régimen autoritario, pero esa unidad no les impidió participar con candidatos propios en las elecciones generales realizadas el 8 de abril del 2001. Como veremos, esa actitud de desprendimiento fue luego abandonada, retomándose el radicalismo y la irresponsabilidad que ha caracterizado su accionar.

7. LOS TEMORES RENACEN

Al iniciarse el 2001, el Perú nuevamente se encontraba agitado por un proceso electoral destinado a elegir presidente, dos vicepresidentes y 120 parlamentarios. En un ambiente caracterizado por los apuros del gobierno de transición en reinstitucionalizar el país, los partidos fueron definiendo sus candidatos presidenciales, los integrantes de sus respectivas listas parlamentarias y trabajando en alianzas o coaliciones. En organizaciones como Perú Posible y Frente Independiente Moralizador (FIM) no hubo mayores sor-

presas. Alejandro Toledo era el candidato del primero y contaba con un amplio favoritismo al momento de iniciarse la campaña. Dos razones explicaban esta aceptación ciudadana: por un lado, haber sido el candidato que unificó el voto opositor derrotando a Fujimori en la primera vuelta electoral del 2000 y, por otro lado, el principal dirigente en la movilización ciudadana contra un tercer e ilegal mandato. Además, se había ganado la adhesión de Acción Popular, partido de tradición en la política peruana y del cual procedía Valentín Paniagua. No es descartable en este temprano favoritismo el hecho de que Toledo fuera una persona de extracción indígena y popular, cuyo éxito político y profesional se sustentaban en haber egresado de la Universidad de Stanford y ejercido la docencia en la de Harvard, y su éxito percibido como producto de su esfuerzo personal basado en su dedicación al estudio y el trabajo.

Fernando Olivera del FIM y quien había proyectado el vídeo en que aparecía Montesinos sobornando al congresista se postuló como candidato presidencial. Luego de haber sido diputado desde 1985, podemos decir que Olivera había forjado su carrera política al presentarse como un abanderado contra la corrupción y en la fase terminal del régimen autoritario fue un destacado integrante de la oposición. Para las elecciones llamó como vicepresidente a una víctima política del fujimorismo, el exalcalde de Lima Ricardo Belmont, recordado por ser uno de los

primeros “outsiders” en la política latinoamericana, pues derrotó a los candidatos de los llamados “partidos tradicionales” en las elecciones para la alcaldía de Lima en noviembre de 1989 y fue reelegido en 1993 venciendo al candidato oficialista.

El Partido Popular Cristiano (PPC) se decidió a formar una coalición con el Movimiento Renovación a la cual denominaron Unidad Nacional. Considerado parte de la oposición oficialista durante el fujimorismo, Renovación representaba, entre otros, a sectores políticos y eclesiales bastante conservadores como el Opus Dei y Sodalitium, los cuales era posible encontrarlos también en el PPC. No hubo sorpresas con la designación de Lourdes Flores como candidata presidencial de este bloque y la lista parlamentaria se conformó sobre la base de la representatividad de los partidos y movimientos integrantes de la coalición. La sorpresa vino por el lado del Partido Aprista Peruano al inscribir como candidato al expresidente Alan García Pérez. Luego de un cuestionado gobierno entre 1985 y 1990 y vivir casi 8 años en el exilio, Alan García regresó convertido en el candidato presidencial del partido más antiguo del Perú. En la acera opuesta, los herederos del fujimorismo como Carlos Boloña, ministro de economía en febrero de 1991 y luego en julio del 2000, se presentó con un movimiento llamado Solución Popular, pero del cual no formaron parte los fundados por Fujimori en la década pasada: Vamos Vecino, Cambio 90 y Nueva Mayoría.

Ahora bien, si los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril del 2000 estuvieron marcados por la manipulación y el fraude, los resultados un año después se caracterizaron por la sorpresa. Como se había previsto, Toledo ganó la primera vuelta pero sólo obtuvo el 35,80% de la votación, resultado muy por debajo de las expectativas que se habían generado entre sus seguidores. El expresidente Alan García, con el 25,75% de los votos válidos, logró pasar a la segunda vuelta, dejando en el camino a quien se había constituido como la más seria competidora de Toledo al iniciar la campaña, Lourdes Flores, quien alcanzó el 24,50%. Fernando Olivera, posterior aliado del gobierno, obtuvo el 9% mientras que los demás partidos y movimientos participantes obtuvieron una escasa votación.

La pregunta obvia sería: ¿qué explica el éxito de Alan García, la caída en la votación de Alejandro Toledo y la derrota de Lourdes Flores? Veamos algunos aspectos para así entender mejor estos resultados. Podemos afirmar que la candidatura de Alan García creció gracias a la incertidumbre que rodeó a las de Toledo y Lourdes Flores. Los mutuos ataques llevaron a que muchos electores vieran en esa competencia una vuelta al pasado prefujimorista, pues ambas campañas generaron un escenario en el cual el debate político se percibió como lugar para dirimir asuntos personales, y se llegó a que los radicalizados discursos entre los principales candidatos transmitieran, entre otras cosas,

las irresueltas fragmentaciones étnicas y clasistas. Esto fue aprovechado por García organizando un discurso conciliador de las diferencias, transmitiendo seriedad y ponderación en sus intervenciones hacia olvidar lo catastrófico de su gobierno, sobre todo en la generación de jóvenes electores. Al asumir el rol de político experimentado y utilizando su cautivante oratoria, por lo demás llena de argumentos retóricos y carente de contenido, atrajo una importante legión de votantes.

En segundo lugar, tanto Toledo como Flores no se distanciaban demasiado de la política económica vigente desde 1990. Ambos asumían el proceso globalizador y el modelo neoliberal como un desafío que el país debía afrontar. Sin cuestionar los resultados obtenidos en el Perú en lo social, pensaban que aquél había retrasado sus objetivos al no haber impulsado las reformas de “segunda generación” entre 1994 y 1999. Como parte de lo social, tanto Toledo como Flores hablaron de la necesidad de acabar con la política asistencialista que tan buenos réditos le había generado a la dictadura, para empezar a generar empleo productivo en los sectores de la economía más afectados por la recesión, pero nunca plantearon los mecanismos para implementar esa propuesta. Alan García, en cambio, organizó su programa económico lleno de generalidades, pero que se hizo mucho más accesible al electorado de bajos ingresos. El aprismo renovado, por lo menos en lo que García ahora encarnaba como persona y no tanto

como político, apareció como una opción pretendiendo rescatar las opciones de centro e izquierda, logrando así canalizar los votos de las clases populares urbanas y de los jóvenes electores, además de tener el cerrado respaldo de su partido y su organización a nivel nacional.

Otro elemento que nos permite entender la derrota de Lourdes Flores: su candidatura fue identificada como un “fujimorismo encubierto”. Mientras Toledo y García establecieron claras distancias con personajes del destituido gobierno, el PPC hizo lo contrario. En primer lugar, pactó con el Movimiento Renovación, grupo que siempre fue percibido como la oposición oficialista durante el régimen autoritario, pues en asuntos trascendentales para la política nacional sus integrantes se alinearon con el gobierno. En segundo lugar, los vínculos con los sectores y jerarquías de la Iglesia Católica ya mencionados, además de haber incorporado en sus listas parlamentarias a personajes relacionados con el gobierno de Fujimori. Por último, el apoyo de los más importantes gremios empresariales del país, los mismos que habían reconocido casi que inmediatamente la segunda reelección de Fujimori en junio del 2000.

El descenso en la votación de Alejandro Toledo es posible de entender si consideramos algunos factores que jugaron en su contra, como los componentes étnicos y clasistas incorporados en su discurso. Algo que pocas veces se ha visto en la historia del Perú, salvo durante la campaña elec-

toral de 1990 cuando Fujimori derrotó a Mario Vargas Llosa, Toledo le apostó a su pasado popular de origen campesino y rasgos indígenas como elementos en su legitimidad política. Amenazando a los sectores altos y medios del electorado con la recuperación de un pasado glorioso y milenario, se distanció de sectores que en determinado momento lo apoyaron como alternativa a Fujimori. El pensar que se acercaba el gobierno de los “Apus”²⁹ tal como lo dijo su esposa en un discurso hablándole a “los blancos de Lima”, llevó a que numerosos electores pertenecientes a las clases medias o medias altas en las ciudades más importantes, se orientaran hacia Alan García y Lourdes Flores.

Podemos considerar que las concepciones de carácter racial o de clase para justificar un posible gobierno o para descalificar al adversario, se constituyeron en un factor de rechazo entre la ciudadanía al momento de decidir su voto. El racismo en un doble sentido se visualizó cuando, por un lado, estaban quienes plantearon que había llegado la hora de expulsar a los blancos del poder, dicho por una europea, profesional y consultora del Banco Mundial y, por el otro lado, aquellos quienes desde una lógica muy aristocrática y pasadista se oponían a la posibilidad que un “cholo” gobernara el Perú³⁰. La consecuen-

cia fue que los factores raciales y clasistas poco contribuyeron a las candidaturas de Toledo y Flores, facilitándole así el ascenso al tercer candidato en discordia.

En medio de lo que un psicoanalista hubiera podido definir como “actos inconscientes” o un politólogo convencional consideraría “errores de campaña”, teniendo los excesos discursivos de los candidatos inicialmente percibidos como favoritos, reapareció en la escena política un Alan García muy distinto al que había gobernado el Perú entre 1985 y 1990. Ahora bien, la segunda vuelta electoral debería haber sido un mero trámite para Alejandro Toledo, pues se pensó que podía recibir el inmediato respaldo de las coaliciones o partidos que habían ocupado el tercer y cuarto lugar en las elecciones. Tanto los integrantes de Unidad Nacional como el Frente Independiente Moralizador han mantenido desde 1985 serias diferencias con el expresidente, lo cual permitió pensarlos como aliados naturales de Perú Posible. A su vez, Toledo podía trabajar en la campaña con lo que significaba un posible retorno de García a la presidencia para así incrementar las antipatías que éste despertaba en sectores de la ciudadanía. Mal cálculo, pues Lourdes Flores optó por negarle su apoyo proclamando la neutralidad en el proceso, reiterando el

²⁹ En la tradición cultural quechua, los Apus son las deidades protectoras de las comunidades campesinas y sus dirigentes.

³⁰ En entrevista transmitida a nivel nacional, el padre de Lourdes Flores calificó a Toledo como el “auquérido de Harvard”.

error que cometieron los partidos en la década del ochenta cuando se proclamaban como oposición, pensando en canalizar el descontento que todo ejercicio del poder trae consigo.

A último momento Toledo logró el apoyo de Fernando Olivera, pero al ser un apoyo que se manifestó de manera muy tardía no logró aumentar significativamente su caudal electoral. El APRA y Alan García se quedaron solos en la contienda, lo cual indujo al candidato a tender puentes mucho más amplios a los escépticos electores. A pesar de los esfuerzos realizados, no pudieron revertir el sentimiento antialanista que permea importantes sectores de la sociedad peruana y, a mi modo de ver, esto fue lo que en última instancia definió la segunda vuelta a favor de Toledo quien ganó, pero por una diferencia que no sobrepasó los 5 puntos.

Ahora bien, quisiéramos concluir señalando la volatilidad manifestada por los ciudadanos durante las elecciones. Resulta evidente que las identidades políticas se mantienen difusas y por demás ambiguas, un voto de Unidad Nacional que pasa al Partido Aprista por ejemplo, lo cual en el corto plazo impide el fortalecimiento de los partidos y facilita la aparición de múltiples movimientos políticos. Junto a esto no se observan intentos serios por reconstruir un sistema político que sustente su funcionamiento en las lealtades hacia las instituciones, sino que más bien se ha optado por mantener y en algunos casos ahondar la imagen del líder como princi-

pal gestor de la acción política. Esto es más evidente en los casos del Partido Aprista y Perú Posible, organizaciones que junto a Unidad Nacional lograron la mayor votación y hoy nuevamente se preparan para una nueva campaña presidencial en el verano del 2006.

8. PARA NO CONCLUIR

Resulta difícil una recuperación de la confianza ciudadana en el régimen democrático, y más cuando se tienen de por medio serios problemas políticos y sociales. El gobierno de Alejandro Toledo para legitimarse requirió afrontar con responsabilidad los desafíos heredados de la dictadura y ahora nuevamente nos preguntamos por la viabilidad del restaurado régimen, sobre todo cuando el gobierno ha llegado a tener tan escasa aceptación ciudadana. Pensamos que la actual crisis del régimen democrático en el Perú se origina en contar con una institucionalidad alejada del contexto en que actúa. El liberalismo clásico y el socialismo reformado por igual, han sido utilizados para organizar la sociedad desde el Estado, pero los proyectos se han visto perjudicados en su continuidad ya sea por la irrupción de dictaduras militares o civiles o por la elección de gobiernos ineficientes.

De la misma manera, dispares políticas económicas que han culminado en la organización de un amplio mercado informal, institucionalizado en sus propios términos y que se manifiesta abiertamente

anti-estatal. Se trata de una nueva economía con sectores emergentes articulados alrededor de los principios del liberalismo radicalizado, el cual funciona con una limitada presencia del Estado y aumentando la precariedad del trabajador. La consecuencia es que existe una nueva clase burguesa sustantivamente diferente a la que se gestó con todo el apoyo del Estado, no del todo incorporada en los escenarios donde se toman las decisiones de alcance nacional, pero igualmente dispuesta a confrontar el accionar del Estado. Al lado de ella tendremos la presencia de nuevas clases populares urbanas, con formas de relacionamiento social muy distintas a las que formaban parte del mundo criollo, pero también mucha marginalidad y empobrecimiento no sólo material sino también moral. Clases medias criollas en extinción, otras emergentes en los nuevos barrios y con visibles signos de prosperidad, marcan la diferencia entre 1980 y 2004. La confluencia de estos elementos lo asumo como una de las condiciones para la recurrente ingobernabilidad y en donde las prácticas populistas encuentran su razón de ser.

Entonces, cuando se ha constituido un tipo de sociedad que no responde al llamado del Estado y éste desconoce los cambios habidos, no debe sorprendernos el alto grado de conflicto que permea las relaciones entre ambos. Es cierto que existen fuertes presiones producto de demandas nunca satisfechas de mejoramiento colectivo, pero también se expre-

san formas de articulación social que no responden al Estado y su ordenamiento legal. Es lo que observamos hoy en día con la indiferencia de la ciudadanía hacia lo que sucede con la política nacional, en tanto el sostenimiento de un gobierno más que algo necesario se percibe como una traba al accionar y al desarrollo individuales. La ilegitimidad del Estado se proyectará a cualquier gobierno, pues es parte de un carácter adquirido en las tres últimas décadas, y a nuestro modo de ver se ha constituido en el principal desafío a cualquier intento por alcanzar la por muchos deseada “gobernabilidad democrática”.

De la misma manera, pensamos que la institucionalidad existente es una mezcla de diversos proyectos denominados modernizadores, pero inconclusos según la perspectiva con que se construyeron: la modernización autoritaria de Juan Velasco Alvarado y su ideología nacional reformista, el régimen democrático restaurado en julio de 1980 y el gobierno de Fernando Belaúnde tratando de administrar el Estado con los principios liberales en lo político y lo económico, Alan García con su proteccionismo tardío altamente concentrador del ingreso, más la última expresión latinoamericana de dictadura patrimonialista, el gobierno de Alberto Fujimori. En consecuencia, las instituciones no son demasiado útiles para un proyecto que sea a la vez liberal y democrático, tomando en cuenta el alto grado de informalidad y el carácter plebeyo

adquirido por el capitalismo local.

En esto juega un rol determinante la destrucción de los principios éticos, los valores democráticos y los criterios estéticos durante el decenio fujimorista. El período en mención se caracterizó por las ilícitas actividades del líder autoritario y su entorno, sobre todo las destinadas a pervertir las instituciones y la acción política como los mecanismos más idóneos para perpetuarse en el poder. El aniquilamiento de los principios éticos en la conducción del Estado trajo consigo el derrumbe moral de gran parte de la población, lo cual ha afectado los vínculos más elementales de la organización social. Consideramos que la reconstrucción del tejido social es competencia no sólo de los gobernantes, sino de todos aquellos que están comprometidos con la democracia en el Perú, instituciones públicas y privadas por igual con capacidad de influir en el rescate de la conciencia ciudadana.

Cosa parecida sucede con las fuerzas armadas, pues la necesaria subordinación de éstas al orden constitucional tiene que darse sobre la base de la lealtad militar a las instituciones. La despolitización de las Fuerzas Armadas se ve perjudicada por decisiones presidenciales que pretenden mostrar signos de fortaleza, pero más bien tienden a debilitar el manejo del gobierno en los momentos de crisis. El nombramiento de un general como ministro de defensa, habiendo dejado días antes el cargo de comandante general del ejército, significa darle vocería a las fuer-

zas armadas en un lugar eminentemente político como es el Consejo de Ministros. Se produce la rectificación en agosto del 2005, pero en un momento donde el gobierno tiene que ordenar su salida y sus márgenes de maniobra están supeditados al apoyo que las instituciones militares tengan que darle.

La situación económica es también un serio desafío que mantiene el actual y futuros gobiernos y no nos estamos refiriendo a las variables macroeconómicas, aquellas que las instituciones multilaterales evalúan para así calificar el desempeño de un país. Si bien es cierto, el Perú tiene hoy en día una tasa de crecimiento que está por encima del promedio latinoamericano y las expectativas para los próximos años son bastante promisorias, no se observa una voluntad política por elaborar una política de carácter redistributivo, quizá porque se corre el riesgo de ser tildado de populista. Sin necesidad de considerarlo populismo, es necesario la elevación de los ingresos en el sector formal e informal de la economía. La población asalariada ha sido la más afectada en su bienestar por los 16 años que dura el proceso de reforma económica con la disminución de sus derechos laborales y en el caso del Perú, podemos asegurar sin temor a equivocarnos, que con la implantación de una economía de libre mercado, la misma que fue precedida por la década perdida y la crisis de los esquemas proteccionistas, se puso en práctica lo que Néstor García Canclini definió

como consumidores del siglo XXI, pero ciudadanos del siglo XVI³¹, el liberalismo radicalizado del nuevo siglo.

En el Perú de hoy se tienen múltiples demandas, por ejemplo, superar el centralismo pues alimenta el descontento en algunos departamentos y regiones, sobre todo aquellas que al haberse modernizado en términos capitalistas locales, mantienen una relación muy conflictiva con el Estado por la poca autonomía que éste les otorga. De la misma manera y más allá de los programas de empleo diseñados por el gobierno, se necesitan políticas destinadas a la reducción del desempleo y subempleo estructural. Por ejemplo, el año 2005 la economía creció a un 6,67% en relación con el anterior, pero el desempleo aumentó en 0,5%. Consecuencia quizá de la poca independencia que se tiene en el manejo económico, se impide la canalización de los recursos propiedad del país, por ejemplo, las reservas internacionales que actualmente llegan a los 15,000 millones de dólares, para destinarlos a financiar actividades que sustenten el crecimiento en el mediano plazo. Si bien es cierto se deben mantener los compromisos adquiridos con el sistema financiero internacional, no es menos importante recuperar márgenes de autonomía para así destinar los recursos a los sectores productivos de la economía.

Las demandas son muchas y la capacidad del Estado para satisfacerlas realmente escasas, producto más de la aceptación

de políticas externas que de la voluntad gubernamental. A pesar del crecimiento obtenido en los últimos años, promedio del 5% anual desde el 2003, la duplicación de las exportaciones en un lapso de 4 años y una inflación a niveles del 2,5% anual, el descontento aumenta. Como hemos visto, la democracia en el Perú necesita que los principales actores políticos y sociales acuerden un esquema redistributivo donde se incorporen variables como la representación o esquema institucional y participen regiones, provincias, comunidades y liderazgos de distinto tipo. Lamentablemente hoy se observa como los integrantes de la clase política e independientemente del grupo o partido político al que pertenecen, le transmiten a la ciudadanía un afán destinado a deslegitimar la acción gubernativa o de sus contrincantes, reiterando los errores del pasado en tanto se presentan como individuos en busca de poder y representando intereses particulares. La ingobernabilidad y las prácticas populistas difícilmente serán erradicados de la política nacional en tanto persista un esquema institucional y político, que sin reconocer las transformaciones de las últimas décadas trata de funcionar desde ese entonces con “modelos importados” (Blades dixit).

Esta página la escribo al momento de conocer los resultados finales de las elecciones presidenciales realizadas en el Perú. Como ha sido costumbre desde 1980, la campaña se adelantó en medio

³¹ García Canclini, 1995.

del típico y ardiente verano que se presenta en el hemisferio Sur durante los meses de enero y abril. De la misma manera, y como ha sido también típico en mi país, las elecciones han llegado cargadas de sorpresas, aunque en realidad esto ya no debería asombrarnos. Creo que las mismas ratifican lo señalado a lo largo del ensayo, pues los resultados confirman la tendencia política que se inició en 1989: la irrupción de un “outsider”, Ollanta Humala, el cual confronta el sistema político con un discurso apresuradamente definido como “nacionalista” y, el peor de los casos, “bolivariano”³². Aquél no alcanza la presidencia de la república, por ahora, pero obtiene la mayoría en el Congreso y, muy probablemente, el “Frente Nacionalista, Democrático y Popular” que está organizando logre importantes alcaldías y gobiernos regionales en las elecciones de noviembre de este año.

El “socialdemócrata” Alan García gana la presidencia a pesar de haber obtenido sólo el 24,32% de los votos en la primera vuelta, superando nuevamente y por muy estrecho margen, a la representante del ala “conservadora” en la política peruana, Lourdes Flores, de la coalición Unidad Nacional, quien obtuvo el 23,81% de la votación, que no pasó a la segunda vuelta a pesar de liderar las encuestas hasta dos meses antes del acto electoral.

En medio de una campaña que algunos analistas han descrito como la versión más acabada, pero sobre todo evidente, de que en política “vale todo”, se observó la ausencia de un debate basado en ideas y principios, una vez más, los símbolos y las actitudes determinaron el rumbo del proceso electoral. No entraremos en los detalles de la campaña, pues está llena de anécdotas, más bien tratemos de entender el resultado final, sobre la base de revisar el papel jugado por los medios, y los “miedos”, el reacomodo de las fuerzas políticas en medio de la larga crisis de ilegitimidad de los partidos y las instituciones, para culminar presentándoles algunos escenarios en los cuales tendrá que desenvolverse el nuevo presidente del Perú.

Es incuestionable que Alan García gana pues Humala se construyó, y en eso jugaron un papel fundamental los medios, como una verdadera amenaza a la democracia y soberanía nacional. Lo primero era asimilable al hecho de haber sido militar, con un pasado no del todo claro en su respeto por los derechos humanos, y por declaraciones algo exageradas, tanto de él como de sus familiares más cercanos, en relación a lo que debería hacerse para recuperar el orden extraviado en manos de políticos incompetentes. Esto sin mencionar lo que se planteó en relación al orden moral que debería gobernar el

³² Pongo entre comillas los términos nacionalista, bolivariano, socialdemócrata y conservadora, pues, me resulta muy difícil encasillar a los mencionados Humala, García y Flores como representantes locales de estas ideologías.

país³³. Lo segundo se debió a la abierta intervención del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la campaña electoral. La percepción de amenaza a la soberanía nacional, se incrementó desde el momento en que Chávez empezó a usar descalificadores adjetivos contra García, para culminar diciendo que rompería relaciones diplomáticas si este ganaba. Obviamente Humala no supo manejar una situación quizás no buscada, y su tardío rechazo a la intromisión del presidente venezolano no fue suficiente para cambiar la percepción que aquélla había generado.

En tal sentido, es posible afirmar que García ganó a pesar de un antecedente que todos los peruanos recuerdan, pues pudo canalizar el voto de todo un sector político que pese a no verlo bien por lo que significa en términos políticos, donde las diferencias culturales tampoco se ocultan, permitía contrarrestar el ascenso de un liderazgo caracterizado por la constitución como “amenaza”. Agreguemos a esto, la sensación de incertidumbre que originó alguien como Ollanta Humala, sin partido y con un programa elaborado por las circunstancias, rodeado de personas de diversa procedencia política y siendo candidato de un partido que no era el suyo. Recordemos que su “Partido Nacionalista Peruano” no logró inscribirse

en los términos legales establecidos, para terminar como candidato de un partido en extinción, pero que mantenía el reconocimiento legal: “Unión por el Perú³⁴”. Este conjunto de percepciones y sensaciones son los que en gran medida explican el anti-voto que le permite a García triunfar, cosa parecida a lo sucedido cinco años atrás cuando esto marcó la diferencia a favor de Alejandro Toledo. Con todo, la votación obtenida por el APRA en la segunda vuelta (52,62%) no establece una diferencia significativa con la obtenida por Humala (47,38%), lo que en términos absolutos no son más de 700,000 votos en medio de los casi 16 millones de sufragios emitidos.

Ahora bien, es necesario señalar que un número bastante elevado de ciudadanos quedan sin representación en el Congreso, debido a las nuevas leyes electorales y de partidos. El umbral para poder colocar congresistas se fijó en el 4% de los votos válidos para congreso, lo cual llevó a que partidos minoritarios y que en su conjunto suman 1'420,756 votos, no logran ni siquiera una curul. Estamos hablando de casi un 9% de electores que no se verían representados dentro de un sistema ya de por sí bastante ilegítimo. Resulta paradójico constatar que todos los movimientos herederos de la antigua Izquierda Unida,

³³ La madre del candidato “nacionalista” señaló que tanto desorden moral se acababa “fusilando a un par de maricones”.

³⁴ Paradójico que haya sido el partido fundado por Javier Pérez de Cuéllar, el que le otorgó el aval a Ollanta Humala para ser candidato a la presidencia.

que en la década del ochenta llegó a ser un tercio del electorado, sumados no llegan a superar el umbral, mientras que el partido político representante de las iglesias evangélicas, Restauración Nacional, sí lo supera y llega a colocar dos congresistas.

En medio del desánimo que caracterizó la actitud del ciudadano al emitir su voto en la segunda vuelta, me atrevería a señalar que Alan García pasará por problemas similares a los de Alejandro Toledo. No sólo su partido será la primera minoría en el Congreso, lo cual ya representa un obstáculo para la voluntad presidencial de hacer aprobar leyes, sino que para lograr el apoyo de las otras organizaciones con importante representación parlamentaria, tendrá que transar aspectos importantes de su discurso político. Si pensamos en una de las banderas con las cuales convocó al viejo y joven electorado aprista, la justicia social como referente en su discurso, entonces se le impone un cambio de la política económica vigente desde 1990. Si observamos que uno de los factores de la inestabilidad ha sido el centralismo, entonces tiene que avanzar en la descentralización como mecanismo para transferir responsabilidades y recursos a las regiones. Así, se mencionan estos dos factores como causa de la inestabilidad que agobió al gobierno de Toledo, de tal forma que si no se plantean soluciones reales desde el nuevo gobierno, estoy seguro quede nuevo tendremos que escribir sobre la ingobernabilidad en el Perú.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberti, Giorgio. (2003). "Fortalecimiento institucional de los partidos y los congresos: una tarea inconclusa", en *Reforma política. El rol de los congresos y los partidos políticos*. Bogotá; UPD-OEA y Parlamento Andino.
- Banco Central de Reserva del Perú. (1994). Lima: *Memoria Anual 1993*, Imprenta del BCR.
- Banco Mundial. (1992). Washington D.C.: *Informe mundial sobre el desarrollo 1991. La acuciante tarea del desarrollo*.
- Cotler, Julio. (2000). "La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismo y la democracia", en Julio Cotler y Romeo Grompone: *El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen autoritario*, Lima: IEP Ediciones.
- Cortázar, Rafael. (1989). "Ajuste estructural: una perspectiva macroeconómica y de política económica", ms, Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
- Deustua, Alejandro. (1988). "Perú: de Alan García a Alberto Fujimori", en Jorge Heine (comp.): *Hacia unas relaciones internacionales de mercado. Anuario de políticas exteriores latinoamericanas 1990-1991*. Caracas: PROSPEL, Nueva Sociedad.
- García Canclini, Néstor. (1995). *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*, México: Editorial Grijalbo.
- Garretón, Manuel Antonio. (1984). *Dictaduras y democratización*, Chile: FLACSO.
- González de Olarte, Efraín y Lilian Samamé. (1994). *El péndulo peruano. Política económica, gobernabilidad y subdesarrollo: 1963-1990*, 2ª edición, Lima: IEP Ediciones.
- Harvey, David. (1990). *Condition of Postmodernity*:

- An Enquiry into the Origins of Cultural Changes*. London: Cambridge: Blackwell.
- Hinojosa, Iván. (1999). “Sobre parientes pobres y nuevos ricos: las relaciones entre Sendero Luminoso y la izquierda radical peruana”, en Steve Stern, editor: *Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995*, Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
- Krasner, Stephen. (1989). *Conflicto estructural. El Tercer Mundo contra el liberalismo global*, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
- Lago, Ricardo. (1989). “La ilusión de una redistribución por medio de una política macroeconómica: La experiencia heterodoxa del Perú (1985-1990)”, en Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (comp.): *Macroeconomía del populismo en América Latina, El Trimestre Económico # 75*, Serie Lecturas, México: FCE.
- Linz, Juan, (1987). *La quiebra de las democracias*, Madrid: Alianza Editorial.
- López, Sinesio. (1989). “Perú de los 80: sociedad y Estado en el fin de una época”, en *Estado y sociedad ¿relaciones peligrosas?*, Lima: DESCO.
- Macroconsult. (1991). Revista *La Moneda*, # 32, febrero.
- Obando, Enrique. (1999). “Fujimori y las Fuerzas Armadas”, en John Crabtree y Jim Thomas (comp.): *El Perú de Fujimori*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Olano, Aldo. (1999). “Las relaciones cívico militares y la caída de la democracia en el Perú”, en *OASIS 98*, Bogotá: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), Universidad Externado de Colombia.
- Perelli, Carina. (1994). “Percepción de la amenaza y el pensamiento político de los militares en América del Sur”, en Goodman, Mendelson y Rial (comp.): *Los militares y la democracia. El futuro de las relaciones cívico - militares en América Latina*, Montevideo. PEITHO.
- Rospigliosi, Fernando. (1996). *Las Fuerzas Armadas y el 5 de abril. La percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista*, Lima: IEP Ediciones.
- Sabel, Charles. (1994). “Industrialización en el Tercer Mundo y nuevos modelos productivos”, en Julio Echeverría (edit.): *Flexibilidad y nuevos modelos productivos*, Quito: Editores Unidos Nariz del Diablo.
- Tanaka, Martín. (1992). *Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú*. Lima: IEP Ediciones.
- Lagos, Ricardo y Eugenio Tironi. (1991). “Actores sociales y ajuste estructural”, en *REVISTA DE LA CEPAL*, # 44, agosto.
- Tuesta, Fernando. (1994). *Perú político en cifras*, Lima. Fundación Friedrich Ebert.
- Vilas, Carlos. (2003). “¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del ‘neopopulismo’ latinoamericano”, en Consuelo Ahumada y Telma Angarita (editoras), *La región andina: entre los nuevos populismos y la movilización social*, Bogotá: Observatorio Andino – Pontificia Universidad Javeriana.